

COMITÉ PARA LA
ELIMINACIÓN DE LA
DISCRIMINACIÓN
CONTRA LA MUJER
2012

ESPAÑOL/ENGLISH/FRANÇAIS

QUINTO Y SEXTO INFORME PERIODICO COMBINADO DEL ESTADO DE CHILE ANTE EL COMITÉ DE LA CEDAW

CONSIDERACIONES GENERALES

1. Los derechos humanos de las mujeres han sido preocupación del Estado de Chile, y en consecuencia en las últimas dos décadas se han reformado y adoptado leyes y normativas, e implementado políticas públicas dirigidas a garantizarlos. El informe del Estado da cuenta de estos avances durante el período 2006-2010. Aún cuando no forman parte de este período de examen del Comité, es relevante referir que en los dos últimos años se han concretado nuevas medidas, como la extensión del postnatal a 6 meses, y están en tramitación legislativa otras medidas como la reforma al régimen de sociedad conyugal que reflejan la voluntad del Estado de Chile para con los derechos humanos de las mujeres.

No obstante, aún se mantienen en la sociedad chilena normas, prácticas y discursos institucionales, sociales y culturales que reproducen el lugar de subordinación de las mujeres y la vulneración de sus derechos. Tanto en el ámbito de la intimidad y del mundo privado como en el espacio público, las mujeres siguen enfrentando barreras y obstáculos que limitan la autonomía de su proyecto vital y el pleno ejercicio de sus derechos en condiciones de igualdad con el hombre.

2. El Estado tiene el desafío de producir información suficiente y consistente desagregada por sexo y otras condiciones—como la edad, la etnia y la nacionalidad— que históricamente han sido fuente de discriminación; la carencia de información limita el cabal cumplimiento de sus obligaciones de promoción, respeto y garantía de los derechos de las mujeres en Chile, y dificulta la fiscalización de la implementación de normas y políticas que debieran resultar en la disminución de la brecha de desigualdad que afecta a las mujeres en el trabajo, la política, la salud, la educación y el mundo de la cultura.

3. Los planes de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres han guiado la política pública en pro de los derechos de las mujeres desde 1994 en adelante¹. La pasada administración evaluó los resultados correspondientes al período 2001-2010 —cuyos avances forman parte del informe del Estado al Comité— y propuso un nuevo plan para el período 2011-2020 en torno a los principios de igualdad y no discriminación, autonomía, y corresponsabilidad social que deberían orientar la acción pública. Preocupa la eventual falta de continuidad a esta política y que hasta la fecha se desconozcan los objetivos, metas y resultados que buscan ser alcanzados en la década actual. La superación de la discriminación hacia las mujeres y el pleno ejercicio de derechos exigen la acción sostenida en el tiempo del Estado, y la formulación de políticas de largo plazo, con objetivos y metas medibles.

¹ Primer Plan de Igualdad de Oportunidades período 1994-1999; 2do Plan de Igualdad de Oportunidades período 2000-2010.

4. Los ejes de trabajo anunciados por el SERNAM para el período 2010-2014 son: i) emprendimiento femenino; ii) incorporación laboral femenina con equilibrio familiar; iii) disminución de la violencia intrafamiliar y evitar la destrucción de la familia; iv) promoción de la participación de la mujer en el ámbito público; y, v) fortalecimiento de la familia como base de la sociedad. Resulta positivo que el Servicio se proponga dar continuidad a programas que fortalecen la vinculación de las mujeres al mundo del trabajo, su participación en el ámbito público y la erradicación de la violencia en el espacio de la familia. Sin embargo, preocupa a este Instituto el particular acento en el rol preferencial de las mujeres en la familia, y que respecto de esta se privilegie su forma tradicional y no una noción plural. Son muchas las formas en las que las mujeres construyen sus espacios afectivos y familiares y todos merecen igual valoración y protección.

5. El informe del Estado da cuenta del impacto diferenciado de la legislación y las políticas públicas en la superación de la discriminación y el pleno ejercicio de derechos por parte de las mujeres. La pobreza, la residencia en zonas rurales, la pertenencia étnica y la nacionalidad, además de la edad y la opción e identidad sexual, entre otras condiciones y situaciones, inciden fuertemente en las reales oportunidades de las mujeres, y hacen más complejas y extensas las dimensiones de la discriminación y la violación de derechos humanos, como lo refleja el caso de Gabriela Blas. Ella es una pastora aymara que fue acusada de abandono con resultado de muerte de su hijo de tres años y condenada a 12 años de presidio mayor en su grado medio por los tribunales de Chile. En el Informe Anual 2011 Situación de los Derechos Humanos en Chile, elaborado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, se señaló que este caso refleja cómo el sistema de justicia es el último eslabón en la relación de la acusada con el Estado que refuerza la exclusión social y la discriminación, constatado antes en otros ámbitos institucionales. Aunque se trata de un diagnóstico conocido –revelado por los perfiles epidemiológicos, los niveles salariales y de vinculación al mercado laboral, y la prevalencia del femicidio, entre otros datos- la acción estatal se muestra aún débil en la disminución de la discriminación hacia las mujeres en el ejercicio de derechos fundamentales.

OBSERVACIONES AL INFORME INICIAL NACIONAL DE CUMPLIMIENTO DE LA CEDAW

Igualdad y no discriminación

6. **Reforma al régimen de sociedad conyugal.** Si bien no se inscribe formalmente dentro del período de análisis de este informe, es relevante adelantar como un avance la presentación por parte del Ejecutivo del proyecto de ley que *Modifica el Código Civil y otras leyes regulando el régimen patrimonial de sociedad conyugal*², cuyo aporte central a la igualdad es que da plena capacidad a la mujer en la administración del propio patrimonio y de los haberes que produce la sociedad conyugal. No obstante, se mantienen en dicho proyecto disposiciones que pueden vulnerar el principio de igualdad, entre estas, la mantención de la sociedad conyugal como régimen supletorio y la designación por mutuo acuerdo del/la cónyuge administrador/a del patrimonio familiar. El Estado tiene la obligación de informar a quienes van a contraer matrimonio sobre las diversas alternativas de regulación patrimonial de manera que las personas puedan con pleno conocimiento decidir por cual optan; caso contrario, resulta arbitrario que ante el silencio de las partes -que bien puede deberse a desconocimiento- el Estado decida en su nombre por una

² Boletín Legislativo N°7567-07, abril de 2011.

opción en particular. En relación a la administración del patrimonio de la sociedad conyugal, el mutuo acuerdo que propone el proyecto no avanza hacia la igualdad real dados los roles de género imperantes en Chile, lo que si lograría la coadministración de los haberes conyugales que entrega poder de decisión y control a las mujeres.

7. Medidas especiales de carácter temporal para acelerar la igualdad de facto. La acción afirmativa es un tipo de medida especial de carácter temporal reconocida en materia de derechos humanos que permite concretar una igualdad de oportunidades que hasta el momento solo es nominal o formal; el Estado está en mora en la adopción de medidas para avanzar en la igualdad sustantiva que se expresa en el igual goce de los derechos para mujeres y hombres. En el Parlamento se ha debatido la posibilidad de adoptar acciones afirmativas en particular en relación con la necesidad de avanzar hacia la representación política equilibrada de mujeres y varones³. El proyecto de ley no reporta a la fecha avances significativos. Chile enfrenta este año elecciones municipales, y el próximo, parlamentarias; los pronósticos muestran que el número de mujeres candidatas y las posibles elegidas no aumentarán sustancialmente. En su informe, el Estado anuncia que SERNAM trabajará por fomentar la participación política de las mujeres, e incluso señala esperar un 40% de aumento en el número de concejales para el 2015, pero no se señalan medidas específicas para avanzar en este propósito. Por otra parte, la adopción de medidas afirmativas fue eliminada del proyecto de ley antidiscriminación recientemente aprobado en el Congreso.⁴

Autonomía económica y trabajo

8. Diferencia salarial. Como un avance del período destaca la entrada en vigencia de la ley Nº 20.348 que resguarda el derecho a la igualdad en las remuneraciones, sin que el sexo sea un factor de discriminación⁵. Sin embargo, a mediados de 2011, la Superintendencia de Pensiones informó que la brecha salarial se habría incrementado en un 17%⁶. Un estudio de la Dirección del Trabajo realizado a un año de adoptada la norma comprueba “un grado bajo de cumplimiento de las obligaciones que la ley establece para el empleador”, además de la escasa promoción y capacitación sobre su implementación, con lo cual “la ley es poco conocida y los sindicatos consultados no saben bien como hacer valer este derecho”⁷. El Estado está llamado a adoptar herramientas adicionales, no solo normativas, destinadas a crear una cultura de igualdad de trato entre hombres y mujeres en el mundo del trabajo. Ello es particularmente relevante cuando la ley deposita en las trabajadoras la iniciativa de denuncia de prácticas discriminatorias, en un contexto en que de acuerdo a la Encuesta Nacional de Derechos Humanos 2011 desarrollada por el INDH, el

³ Boletín 5553-06, proyecto de ley que establece política equilibrada de hombres y mujeres en el acceso y ejercicio de cargos de elección popular, ingresado en diciembre 2007.

⁴ Boletín 3815-07, proyecto de Ley que Establece Medidas contra la Discriminación, ingresado en marzo 2005.

⁵ Ley Nº 20.348 que incorpora al Código del Trabajo el principio de igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres que ejecuten las mismas labores. Publicada en el Diario Oficial el 19 de junio de 2009.

⁶ Emol.cl, Cifras de la Superintendencia de Pensiones: La brecha de sueldos entre hombres y mujeres crece y alcanza el 17%, 3 de septiembre de 2011. Las mujeres tienen una media salarial más baja que los hombres. La brecha aumenta con los años de calificación, alcanzando 31.9 puntos porcentuales sobre los 13 años de estudio (Informe de política social. MIDEPLAN 2011).

⁷ Dirección del Trabajo (2011). “El derecho a ganar lo mismo. Ley Nº 20.348, igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres”. Temas laborales Nº 27.

66.4% de la sociedad chilena percibe que si defiende sus derechos laborales puede perder el puesto de trabajo⁸.

9. Participación en el mercado laboral. El Estado informa de los programas en marcha para aumentar la participación laboral de las mujeres, con especial acento en aquellas de los quintiles de mayor pobreza donde se registran menores índices de vinculación y mayores grados de desocupación⁹. De hecho, la participación laboral de las mujeres se ha incrementado en los últimos años: SERNAM da cuenta de 47.8% al cierre de 2011 -aún 26 puntos bajo la participación masculina- e informa que el 63% de los 211.000 empleos creados ese año fueron ocupados por mujeres. Sin embargo, preocupa que se trate principalmente de trabajo precario e inestable. En efecto, entidades especializadas advierten que 47% de estos empleos femeninos son por cuenta propia y 34 % corresponden a empleo asalariado: “El trabajo por cuenta propia que se observa en este período es principalmente precario, con alta presencia de jornada parcial y trabajadores de baja calificación”¹⁰. Por su parte, en la modalidad de ocupación salarial, el 100% responde a “subcontratación, servicios transitorios y suministro de personal y enganchadores, lo cual es una señal de mayor precarización e inestabilidad en el mundo del trabajo”¹¹.

10. El Estado en su informe da cuenta de la aprobación de leyes e iniciativas de política pública como el Modelo Iguala y el código de buenas prácticas laborales sobre no discriminación. Los avances que ha expuesto muestran que estas medidas, aunque necesarias, resultan insuficientes para modificar los patrones culturales que limitan la participación laboral de las mujeres y para superar la discriminación que las relega a trabajos precarios, desprotegidos y mal remunerados. Muchas normas quedan sin difusión y fiscalización suficiente para hacer efectivos los cambios, como en el caso de la ley de igualdad salarial o la de acoso sexual.

11. Contrato de trabajo y condiciones laborales. El gobierno presentó en 2011 los resultados de la primera Encuesta Nacional de Empleo, Trabajo, Salud y Calidad de Vida de los Trabajadores y Trabajadoras en Chile 2009-2010. El INDH reconoce la aplicación de este instrumento que da cuenta del vínculo entre las condiciones de empleo, trabajo y salud. Sus resultados muestran que, en el sector privado, las mujeres acceden en menor proporción que los hombres a contratos escritos: 70% y 85.9% respectivamente. La desagregación del dato por nivel educativo evidencia que la falta de contrato se concentra en las mujeres con escasa escolaridad (49.6% de las que cuentan con educación básica incompleta tienen contrato, frente a 88.7% que han completado estudios universitarios). Transversalmente, las mujeres son las que presentan más frecuentemente contratos verbales, y esta práctica se concentra en ocupaciones de servicios y comercio (34%), es decir donde abunda el empleo femenino.

12. Trabajo reproductivo y participación laboral. Dada la fuerte incidencia del trabajo reproductivo y de cuidado de la familia en la baja tasa de participación laboral de las mujeres, el

⁸ Instituto Nacional de Derechos Humanos, Primera Encuesta Nacional de Derechos Humanos, 2011, disponible en www.indh.cl

⁹ Al desagregar por quintil, la participación en el mercado de trabajo de las mujeres de los sectores de mayor pobreza es sustancialmente menor que en los sectores de mayor ingreso: la tasa es de 25.5 para el primero, de 35.1 en el segundo, de 43.3, en el tercero de 51.7 en el cuarto y de 58.7 en el quinto. Respecto de la desocupación, la desigualdad se reitera: 32,6% para el primer quintil y 5,6% para el quinto. (Casen 2009).

¹⁰ Fundación Sol. Minuta de empleo nº 4. Julio – Septiembre 2011. Unidad Estadísticas del Trabajo Ibídem.

¹¹ Ibídem.

Estado en su informe da cuenta de políticas públicas a efectos de hacer compatibles familia y trabajo¹². Si bien en lo principal las políticas en esta materia han estado dirigidas exclusivamente hacia las mujeres, reforzando y reproduciendo con ello la marca cultural que delega en ellas la responsabilidad principal de la reproducción y el cuidado¹³, cabe señalar que se han introducido reformas destinadas a fomentar la corresponsabilidad¹⁴. No obstante, el escaso porcentaje de varones que opta por asumir las funciones de cuidado de acuerdo a dicha reforma -en los primeros tres meses de vigencia de la nueva ley de postnatal, sólo 0.6% de los padres ha hecho uso del permiso parental de hasta 7 semanas que la norma les otorga- dan cuenta de las resistencias culturales que enfrenta aún la sociedad chilena en estas materias. A ello se suma que, en general la legislación que otorga beneficios a los padres en las labores crianza y el cuidado se activan exclusivamente ante la ausencia de la madre.

13. Trabajadoras de casa particular. Se estima que alrededor de 300.000 mujeres trabajan en este rubro, entre ellas un número significativo de inmigrantes¹⁵. En su informe el Estado da cuenta de los avances legislativos en la modificación del salario mínimo, derecho a descanso en días festivos y fuero maternal, y la tramitación de un proyecto de ley que tiene por fin principal equiparar la jornada de las trabajadoras domésticas (hasta 72 horas semanales) a la regulación ordinaria (45 horas semanales). La eliminación de esta distinción arbitraria debe ser acompañada de la fiscalización efectiva del acatamiento de la norma más aún si se considera que el incumplimiento de la legislación, en muchos casos, se asocia con discriminaciones por nivel socioeconómico, origen étnico o nacionalidad, entre otras condiciones de las trabajadoras¹⁶.

Salud y derechos sexuales y reproductivos

14. Embarazo adolescente. En Chile, 48% de las madres adolescentes pertenecen al sector socioeconómico bajo el nivel de pobreza y el 74% de ellas, a los dos quintiles de menores ingresos¹⁷. De las madres de entre 15 y 19 años de edad, 54,5% pertenecen a las zonas rurales más pobres a nivel nacional¹⁸. El 80% del total de madres adolescentes deja sus estudios.

¹² Según la encuesta nacional de empleo del INE, la razón principal que esgrimen las mujeres para no estar vinculadas al mercado laboral es el trabajo doméstico de cuidado de niños/as y personas adultas mayores (36.7%); le siguen los estudios (19.2%). Encuesta Nacional de Empleo, trimestre móvil Ene-Mar2011, INE.

¹³ El 83% de las mujeres señala ser las únicas que realizan el trabajo doméstico, entre lo que se incluyen las tareas de cuidado y crianza de los niños y las niñas. PNUD: Desarrollo Humano en Chile 2010. Género los desafíos de la igualdad.

¹⁴ Ley N° 20.545 que modifica las normas sobre protección a la maternidad e incorpora el permiso postnatal parental, adoptada en octubre de 2011. En lo sustancial, la nueva ley agrega al post natal de 3 meses un periodo adicional de 3 meses, al que denomina permiso parental. Con ello, las mujeres que así lo decidan y que cumplan con los requisitos de afiliación y un número determinado de cotizaciones pueden acceder a un período de 6 meses de postnatal. La ley también posibilita al padre acceder al permiso parental por un tiempo máximo de siete semanas, si es que la madre está de acuerdo.

¹⁵ 70% de las mujeres peruanas se desempeña en trabajo doméstico en casa particulares. Núñez, Nuria y Torres, Carmen (2007), "Mujeres migrantes peruanas y salud reproductiva", UNFPA y Fundación Instituto de la Mujer, Santiago.

¹⁶ Ver más información al respecto en <http://sintracapchile.cl>

¹⁷ Normas Nacionales Sobre Regulación de la Fertilidad, en: http://www.bcn.cl/carpeta_temas/temas_portada.2006-10-03.7146246056/mas-documentos-sobre-embarazo-adolescente/NormasFertilidad%20MINSAL.pdf, p. 122.

¹⁸ Ministerio de Salud (2009). Diagnóstico de la Situación del Embarazo en la adolescencia en Chile.

15. La reducción del embarazo adolescente fue objetivo sanitario para el período 2000-2010, con la meta de disminuir a 46 por mil nacidos vivos la tasa de fecundidad de las jóvenes entre 15 y 19 años y a 0, la de niñas entre 10 y 14 años¹⁹. La evaluación de cumplimiento muestra que para 2007, la de las jóvenes se mantenía en 53,4 por mil nacidos vivos y la de niñas no bajó más de 1,2 por mil nacidos vivos. Resulta oportuno que la autoridad sanitaria haya mantenido la reducción del embarazo adolescente como una de las metas en el Plan Nacional de Salud para el Logro de los Objetivos Sanitarios 2011-2020²⁰.

16. Un avance del período es la promulgación, en febrero de 2010, de la Ley N° 20.418 que “Fija Normas sobre Información, Orientación y Prestaciones en Materia de Regulación de la Fertilidad”. Su adopción zanja un largo debate sobre la anticoncepción de emergencia y respecto de la edad límite de acceso autónomo de las adolescentes a la píldora²¹. A pesar de ello, las mujeres siguen enfrentando problemas en el acceso a anticonceptivos, y a la anticoncepción de emergencia en particular. La ley no cuenta con un reglamento y, por lo tanto, la acción de las distintas reparticiones públicas sigue con altos niveles de discrecionalidad en relación a su distribución gratuita, afectando el ejercicio de los derechos allí garantizados. De acuerdo con un estudio realizado por FLACSO²² en 2010, un tercio de los consultorios de salud no entrega la PAE²³ a las usuarias que la necesitan²⁴. El acceso oportuno e informado a métodos anticonceptivos resulta determinante para el efectivo goce y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. El Estado debe poner a disposición de la comunidad los recursos económicos y técnicos para el ejercicio de estos derechos, particularmente el acceso a la anticoncepción de emergencia.

17. En Chile el aborto en todas sus formas se sanciona penalmente a pesar de las recomendaciones realizadas por diferentes órganos encargados de la supervisión de tratados, incluido el comité de la CEDAW. No obstante el debate sobre el acceso al aborto en determinadas circunstancias se ha manifestado en varias coyunturas y a través de casos particulares, en la prensa. De hecho formó parte de los temas abordados en la última campaña electoral - particularmente en torno a la reposición del aborto terapéutico derogado en 1989-. En el parlamento se han presentado varios proyectos de ley que proponen reformas a la actual legislación para considerar la regulación del aborto en casos de riesgo para la vida y salud de la mujer, por razones de malformación grave incompatible con la vida y por violación; sin embargo

¹⁹ Ministerio de Salud. Objetivos Sanitarios 2000-2010. Disponible en www.epi.minsal.cl Al comienzo de la década las tasas eran 65,4 y 1,7 por mil nacidos vivos, respectivamente.

²⁰ Ministerio de Salud. Objetivos estratégicos en salud, documento borrador de consulta. Revisión Final, 10 de noviembre 2010.

²¹ Las Normas de Regulación de la Fertilidad permitieron su distribución en la red asistencial pública a solicitud de las mujeres que la necesitaran; luego, la resolución del Tribunal Constitucional (ROL 740-07-CDS) derogó la prestación y limitó su entrega a situaciones de violencia sexual. A continuación, el Ministerio de Salud dejó a discreción de las autoridades municipales –como órganos autónomos a cargo de los servicios de salud de su jurisdicción- facilitarla en otras situaciones. Posteriormente, la Contraloría dictaminó que los municipios no tenían esta facultad (Dictamen N° 31.356 del 16 de junio de 2009). Finalmente, la ley 20.418 repone la prestación y permite su distribución en los servicios de salud a requerimiento de las mujeres.

²² Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.

²³ Pastilla Anticonceptiva de Emergencia.

²⁴ Dides, Claudia et. al. Entrega de la píldora anticonceptiva de emergencia en el sistema de salud municipal de Chile. Estado de situación 2010. Flacso, Santiago.

los proyectos presentados no han logrado avanzar en el debate parlamentario habiéndose aprobado recientemente y respecto de tres propuestas la idea de no legislar en esta materia²⁵.

Derecho a una vida sin violencia

Trata

18. Chile es país de origen, tránsito y destino de trata de hombres, mujeres, niñas y niños con fines específicos de explotación sexual y laboral. Si bien fuera del período bajo análisis en este informe, el INDH adelanta como un avance la nueva tipificación del delito de trata de personas adoptada por el país en abril de 2011, que además de la explotación sexual amplía el delito a trabajos o servicios forzados, servidumbre o esclavitud o prácticas análogas a ésta, o extracción de órganos²⁶. La reforma no incluye la trata interna de personas, aun cuando existen antecedentes de su ocurrencia en el país.

19. Aun cuando en su informe el Estado refiere la creación de la Mesa Intersectorial sobre Trata de Personas cuyo objetivo es “coordinar acciones, planes y programas de los distintos actores institucionales en materia de prevención, represión y sanción de la Trata de personas, especialmente mujeres y niños”, no ha sido posible conocer su plan de trabajo, acciones desarrolladas y sus resultados²⁷. Persiste un serio problema de falta de producción y sistematización de información sobre la trata, que dificulta un diagnóstico más acucioso. El país no cuenta con un sistema de registro que permita conocer la magnitud del problema, el tipo de explotación e identificar los lugares en el país donde aparece con mayor frecuencia, las personas afectadas por sexo, nacionalidad y edad, además de otra información relevante para la prevención y atención del problema, y la protección de las víctimas. Se agrega que pocas reparticiones públicas – SENAME y Policía de Investigaciones- cuentan con programas de atención y personal capacitado.

20. En mayo de 2011 se conoció la denuncia de explotación laboral de ciudadanos/as paraguayos/as, caso ante el cual el INDH ha interpuesto una querrela criminal. Un grupo de personas fue captado, trasladado, transportado y recibido en Chile con el fin de realizar trabajos que pueden ser calificados como servicios forzados, o al menos una forma análoga de estos, en malas condiciones humanas y laborales. El proceso se encuentra suspendido, en la etapa de investigación, dado el estado de salud del principal implicado. El Estado en virtud de sus obligaciones en derechos humanos tiene el deber de investigar y sancionar con la debida diligencia a los responsables y dar protección y reparación a los y las ciudadanos/as paraguayos/as cuyos derechos fueron vulnerados. Durante 2012, el INDH ha interpuesto dos querrelas más – una por

²⁵ Los proyectos rechazados son: 1) Sobre interrupción terapéutica del embarazo (Boletín 6522-11) presentado por el senador Camilo Escalona en mayo de 2009; 2) Modifica el Código Sanitario señalando los casos en los cuales se podrá interrumpir un embarazo (Boletín 6591-11) presentado por los senadores Guido Girardi y Carlos Ominami en julio de 2009; 3) Despenaliza la interrupción del embarazo por razones médicas (boletín 7373-07) presentado por la senadora Evelyn Matthei y el senador Fulvio Rossi en diciembre de 2010.

²⁶ Ley N° 20.507, publicada el 8 de abril de 2011.

²⁷ Durante el 2011, el INDH envió al Ministerio del Interior dos oficios solicitando esta información (N° 196 y N° 493 del 4 de mayo y 16 de agosto respectivamente), hasta la fecha sin respuesta.

explotación sexual de mujeres de República Dominicana, y otra por explotación laboral de ciudadanos peruanos- actualmente en curso en los tribunales de justicia.

Acceso a la justicia

21. Erradicar la violencia y la discriminación contra las mujeres requiere políticas integrales, y en este sentido el Estado de Chile ha hecho esfuerzos, pero aún queda espacio para mejorar. La falta de conocimiento y capacitación en materia de género por parte de actores clave, las falencias en los procedimientos judiciales sumado al bajo número de mujeres en los cargos de poder de la administración de justicia²⁸ son algunos de las debilidades que tiene que superar el Estado de Chile para satisfacer la demanda de justicia en un sentido amplio.

22. Constituye un avance la promulgación de la ley 20.480 que amplía el delito de parricidio (incluyendo ex cónyuge y conviviente) y denomina al agresor como femicida. No obstante, el acceso a la justicia sigue siendo uno de los principales problemas para la protección de los derechos humanos de las mujeres.

23. El Estado aún no produce información y estadísticas que permitan conocer la magnitud del problema en el país. Sin embargo, estudios realizados por entidades públicas permiten inferir que al menos 1 de cada tres mujeres ha vivido violencia en sus relaciones de convivencia²⁹, y las estadísticas de seguridad pública y del poder judicial muestran que el número de denuncias de hechos de violencia y de casos que se judicializan ha aumentado en forma sostenida en los últimos años³⁰. El tratamiento judicial de los casos en sede penal muestra que la proporción de salidas no judiciales que arroja el sistema no se ha modificado sustancialmente, como tampoco lo ha hecho la relación entre sentencias condenatorias y suspensiones condicionales de la sentencia, marcando así un patrón sostenido de un tipo de procesamiento judicial que resulta preocupante³¹. Por su parte, en los tribunales de familia la información que proporciona la Corporación Administrativa

²⁸ Numerosos estudios dan cuenta de cómo, la diversidad de género en la composición de espacios de poder y toma de decisiones, tiene un impacto en el tipo de resoluciones que se toman y en los contenidos de las sentencias. En Chile, la cantidad de mujeres en los diferentes tribunales del país es la siguiente: la presencia de mujeres aumentó de 20% a 35% entre 1995 y 2009 (incluyendo Corte Suprema, Cortes de Apelaciones y el Tribunal Constitucional); sin embargo, siguen constituyendo sólo 30% de los/as Ministras y 32% de los/as presidentes de Cortes. La primera mujer en llegar a la Corte Suprema fue María Antonia Morales en el año 2001. (PNUD. Desarrollo humano en Chile: género, los desafíos de la igualdad. Santiago, 2010). Situación similar se constata en el Ministerio Público: 28% de las fiscales son mujeres, y solo una fiscalía regional de las 18 está bajo la responsabilidad de una mujer. En la Defensoría Penal Pública, sólo una de las oficinas regionales está a cargo de una mujer. (Información tomada de las páginas web del Ministerio Público y de la Defensoría Penal Pública en agosto de 2011).

²⁹ La Encuesta Nacional de Victimización del Ministerio del Interior de 2008 arroja que la prevalencia de violencia intrafamiliar para mujeres es de 35.7%. Los datos son para mujeres mayores de 15 años que han tenido una relación de convivencia; por tanto queda excluido de este universo la violencia que se produce en el pololeo, y la violencia sexual que proviene de integrantes de la familia. Disponible en: http://www.seguridadpublica.gov.cl/files/presentacion_violencia_intrafamiliar_v2.pdf

³⁰ El Ministerio del Interior reporta que la tasa de denuncias por violencia intrafamiliar ha pasado de 390,3 por cien mil habitantes en 2001, a 638,5 por cien mil habitantes en 2010. Por su parte, el Ministerio Público reportó el ingreso de 53.963 casos en 2007 frente a 117.145 en 2010.

³¹ Las salidas judiciales fueron 50.6% en 2008 y 56,5% en 2010, de acuerdo con los datos del Ministerio Público. De ellas, las sentencias condenatorias fueron 9.5% y 9.9% respectivamente. Las salidas no judiciales han variado de 49.4% a 43.4% en esos mismo años.

del Poder Judicial no permite diferenciar entre sentencias condenatorias y suspensión condicional de la dictación de sentencia.

24. Femicidio. Los esfuerzos por parte del Poder Judicial y del Ministerio Público se han concentrado en otorgar medidas cautelares que protejan la vida e integridad de las mujeres que acuden a denunciar hechos de violencia con la mayor celeridad; por su parte, la política gubernamental se ha abocado a ampliar el número de centros de atención a las mujeres agredidas y la red de casas de acogida a nivel nacional. Estas disposiciones dan cuenta de una preocupación por mejorar la protección de la vida e integridad de las mujeres que viven violencia por parte de sus parejas o ex parejas. Sin embargo, el alto número de femicidios en el país ³² y la constatación que en varios casos las víctimas contaban con medidas de protección dan cuenta de una respuesta aún insuficiente frente a la magnitud y complejidad del fenómeno. A ello hay que agregar que no existe información –ni en sede penal ni en Juzgados de Familia– respecto al cumplimiento o incumplimiento de las medidas cautelares o de las condiciones de las suspensiones, lo que dificulta el diseño adecuado de política y la necesaria evaluación de las mismas.

25. Campañas y prevención. La violencia contra las mujeres hace parte de un patrón cultural profundamente arraigado en la sociedad chilena. Para su erradicación se requiere tanto su prevención y atención en los servicios públicos, como la sanción a quienes la cometen. Estos tres elementos, que conforman una política integral para abordar el problema, se encuentran en Chile desagregados y con desigual desarrollo. La respuesta estatal se ha centrado, como en casi toda América Latina, en la dimensión judicial y de tipo penal, y por lo mismo resulta insuficiente para brindar la protección integral a la que se encuentra obligado el Estado para con sus ciudadanas. Se requiere de esfuerzo concertado y sostenido de la institucionalidad pública para el desarrollo de medidas de prevención que incluyan campañas permanentes y con enfoque de derechos.

Educación

26. Los temas de cobertura del sistema educativo hace tiempo que dejaron de presentar brechas de género. Sin embargo, las razones de deserción o no asistencia educacional (Encuesta de Caracterización Socio-Económica Nacional CASEN 2009), responden a patrones tradicionales de género: los hombres desertan por trabajo y las mujeres por funciones reproductivas y domésticas. Los déficits se concentran en grupos específicos de niñas y jóvenes, entre estas, las dificultades que enfrentan aquellas en situación migratoria irregular y las refugiadas para acceder al sistema educativo en razón de la carencia de documentación que dé cuenta de sus años de estudio. Aun cuando existe normativa del Ministerio de Educación sobre el particular, esta contiene disposiciones que no necesariamente atienden estas dificultades. Situación similar enfrentan las jóvenes privadas de libertad: varios centros de reclusión provisoria no cuentan con escuelas o programas de educación regular; sólo el 31% de las mujeres en internación provisoria acceden a procesos de reinserción escolar; y quienes están en regímenes semicerrados y que deben

³² Según información Red Chilena contra la Violencia Doméstica y Sexual, desde el año 2001 a la fecha se han producido, más de 500 asesinatos de mujeres por razones de género. Disponible en: www.nomasviolenciacontramujeres.cl

insertarse en establecimientos regulares de educación enfrentan segregación lo cual conlleva auto exclusión y una baja participación escolar, particularmente en el sistema regular³³.

27. Educación sexual. Las visiones contrapuestas sobre cómo educar en este campo han hecho que la política educativa sea general, dejando la responsabilidad primaria en la familia, y dando “plena autonomía de los establecimientos para elaborar planes y programas propios de acuerdo a sus requerimientos y opciones de las comunidades educativas”. El Estado tiene roles indelegables de promoción y regulación que no puede transferir aludiendo a la libertad de enseñanza. En los siete programas que puso a disposición el Ministerio de Educación en acuerdo con SERNAM durante el año 2011, se constata que al menos dos de ellos no se ajustan a los estándares de derechos humanos que se derivan de la CEDAW y de otros tratados, ya que limitan sus contenidos de salud reproductiva a respuestas únicas (sin alternativas) de carácter heteronormativas -es decir, reafirman una única forma de familia basada en relaciones heterosexuales- lo que puede avalar situaciones de discriminación respecto a personas de preferencia sexual o identidad de género diversas³⁴. Esta situación es preocupante, más aún si se considera que los programas no son gratuitos y que las escuelas deben concursar a fondos que cubren parcialmente sus costos.

28. Barreras a la permanencia en el sistema escolar de adolescentes embarazadas. En el 2010 hubo 4.806 casos de embarazo adolescente y 7.803 madres adolescentes registradas por el departamento de salud del estudiante de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), y 65 denuncias de no resguardo del derecho a educación en estudiantes embarazadas o madres, recepcionadas por el Ministerio de Educación. Durante el primer semestre de 2011 ingresaron 42 denuncias similares. El porcentaje de establecimientos en donde los padres y madres declaran conocer casos de expulsión o cancelación de matrícula por esta causa supera el 10% en los municipales, el 25% en los particulares subvencionados y sobre el 28% en los particulares pagados³⁵. Esto evidencia que, pese a su prohibición expresa desde el año 2000³⁶, hay escasa capacidad para fiscalizar y erradicar prácticas de discriminación, las que no logran ser eliminadas solo por la vía legal. El gobierno, en su informe al Comité, no da cuenta de avances significativos en la adopción de medidas para hacer efectiva la continuidad de estudios de estas adolescentes.

³³ Unidad de Gestión intersectorial del Depto de Justicia Juvenil de la Dirección Nacional Sename, enviada el 9 de septiembre de 2011, pero que da cuenta de la información registrada al 30/06/2011.

³⁴ Los programas tienen sus reseñas (no su contenido completo) en el sitio del Mineduc (http://www.mineduc.cl/index1_int.php?id_portal=55&id_seccion=3354&id_contenido=13646) y corresponden a: Aprendiendo a querer (Aliance for the family aff); Adolescencia: tiempo de decisiones (Centro de Medicina Reproductiva y Desarrollo Integral de la Adolescencia); Sexualidad, Autoestima y Prevención del Embarazo en la Adolescencia (Aprofa); Curso de Educación Sexual Integral (Centro de Educación Sexual Integral); Programa de Aprendizaje en Sexualidad y Afectividad (Facultad de Ciencias Sociales Universidad de Chile); Programa de Educación en Valores, Afectividad y Sexualidad (Universidad San Sebastián), y Teen Star (Universidad Católica de Chile). Sobre la base de la información pública que consta de estos programas, y de la que disponen la escuelas para escoger uno u otro, el INDH constató que dos presentan falencias respecto a los estándares internacionales de derechos humanos en materia de información sobre métodos anticonceptivos diversos y seguros, salud sexual y derechos reproductivos, y respeto y no discriminación a la diversidad sexual (Aprendiendo a querer; curso de educación sexual integral); y, otros dos no son claros en indicar si informan sobre métodos anticonceptivos y si trabajan respetuosamente en torno a la diversidad sexual e identidad de género (Programa de Educación en Valores, Afectividad y Sexualidad y Teen Star).

³⁵ Cuestionario censal a Padres de 2° medio, Simce 2010

³⁶ Ley N° 19.699, del 5 de agosto de 2000.

29. La igualdad de género es uno de los Objetivos de Aprendizaje Transversal (OAT) definidos en las bases curriculares³⁷, pero no ha sido integrado de manera explícita en ninguno de los sectores ni se los integra en las actitudes a promover en el sector, salvo en Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Adicionalmente se ha eliminado el lenguaje inclusivo en las bases curriculares, señalando: “En el presente documento, se utilizan de manera inclusiva términos como “el docente”, “el estudiante”, “el profesor”, “el alumno”, “el compañero” y sus respectivos plurales (así como otras palabras equivalentes en el contexto educativo); es decir, se refieren a hombres y mujeres. Esta opción obedece a que no existe acuerdo universal respecto de cómo evitar la discriminación de géneros en el idioma español, salvo usando “o/a”, “los/las” u otras similares para referirse a ambos sexos en conjunto, y ese tipo de fórmulas supone una saturación gráfica que puede dificultar la comprensión de la lectura”.

CONVENIOS POR RATIFICAR

- .- Protocolo CEDAW
- .- Convenio 189 OIT sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011
- .- Convenio 183 OIT sobre protección de la maternidad, 2000
- .- Convenio 184 OIT sobre la seguridad y la salud en la agricultura, 2001
- .- Protocolo San Salvador

³⁷ La Ley General de Educación (Ley N°20.370, del 2 de julio de 2010) establece que los objetivos de la educación deben expresarse en objetivos de aprendizaje, los que deben ser elaborados por el Ministerio de Educación y aprobados por el Consejo Nacional de Educación. Las nuevas bases curriculares fueron aprobadas en enero de 2012 (DS N°439/2012) y en ellas se reconocen dos tipos de objetivos de aprendizaje, los propios de cada disciplina y otros de carácter transversal que se “refieren al desarrollo personal y a la conducta moral y social de los estudiantes”.

COMBINED FIFTH AND SIXTH PERIODIC REPORT OF CHILE TO THE CEDAW COMMITTEE

GENERAL CONSIDERATIONS

1. Women's human rights have long concerned the Chilean State and in the last two decades a number of laws and regulations have been adopted and reformed, and public policies implemented in order to guarantee these rights. The State's periodic report concerns steps taken towards this end during the period 2006 – 2010. Although not forming part of the review period of the Committee it is relevant to note some new measures taken in the previous two years reflecting the will of the State to support women's human rights. These include the extension of postnatal care provision to 6 months, and the proposed reform of the joint marital property regime currently undergoing legislative approval in Parliament.

In spite of all this, Chilean society maintains a number of regulations and institutional, social and cultural practices which entrench the subordination of women and infringe upon their rights. Within the intimate and private spheres, as much as in the public one, women continue to face obstacles limiting their full autonomy and exercise of rights as compared to men.

2. The State faces the challenge of producing sufficient and consistent information disaggregated by sex and other variables, like age, ethnicity, and nationality that have historically been subject to discrimination. The lack of information limits its obligatory fulfilment of promoting, respecting and guaranteeing human rights of women across the country, and makes more difficult the task of overseeing the implementation of policies seeking to minimise the female inequality gap prevailing in the worlds of work, politics, health, education and culture.

3. Programmes of equal opportunity between men and women have guided public policy in favour of women's human rights since 1994¹. The previous Government evaluated the results for the period 2001-2010 (some of which are included in the periodic report to the Committee), proposing a new plan for the period 2011-2020 based on the principles of equality, non-discrimination, autonomy, and social responsibility. Concerns remain as to this policy's overall lack of continuity. Furthermore, the sought after goals, objectives and results of the current decade's plan remain unknown. Overcoming discrimination against women and ensuring their full exercise of rights demand sustained State action and the formulation of long term policies with measurable goals and objectives.

4. Key work announced by SERNAM (the National Office for Women's Affairs) for the period 2010-2014 includes: i) female entrepreneurship; ii) female incorporation into the labour market, with family balance; iii) the reduction of domestic violence and family disintegration; iv) the promotion of women's participation in the public sphere; and v) the strengthening of the family as the foundation unit of society. A positive aspect of this is SERNAM's proposal to implement programmes geared towards strengthening links between women and the world of work, their participation in the public

¹ First Equal Opportunities Programme, 1994-1999; Second Equal Opportunities Programme, 2000-2010.

sphere, and the eradication of domestic violence. However, a particular concern of this Institute is the preferential role subscribed to women within the family, thereby favouring a traditional notion of gender over a more pluralist one. There are many ways in which women shape their family and affective spaces and all deserve equal worth and protection.

5. The periodic report notes the differing impact of legislation and public policies in overcoming discrimination and the full exercise of women's rights. Poverty, residence in rural areas, ethnic background, nationality, age and sexual orientation, among others, all bear strongly on the genuine opportunities of women and make the scale of human rights discrimination and violation all the more complex and numerous. The case of Gabriela Blas exemplifies this. An Aymara shepherdess accused of abandoning, and therefore directly causing the death of her 3 year child, she was sentenced to 12 years imprisonment for second degree murder by the courts. In the INDH's (National Institute of Human Rights') Annual Human Rights Review of Chile 2011 the case was used to exemplify how the justice system constitutes the final link in the relationship between the accused and the State in reinforcing social exclusion and discrimination, previously established within other institutional circles. Although the diagnosis is well known (as shown by, among others, health profiles, salary levels, links to the labour market, and the prevalence of femicide), State action remains weak in reducing discrimination against women in the exercise of fundamental rights.

OBSERVATIONS ON THE INITIAL COUNTRY REPORT IN COMPLIANCE WITH CEDAW COMMITMENTS

Equality and non-discrimination

6. **Reform of the joint marital property regime.** Although falling beyond the formal period of review of the periodic report it is relevant to highlight a bill of the current Government entitled *Modifying the Civil Code and additional laws regulating joint marital property regime*². In terms of equality, it grants women the ability to manage their own estate as well as all joint assets produced during the marriage. Nonetheless, the bill maintains certain provisions that might infringe upon the principle of equality, including the default status of the joint marital property regime, and the appointment of the spouse administrator of the joint estate by mutual agreement. The State is obliged to inform individuals signing a marriage contract of the diversity of marital systems available, and from which to choose, in a clear and understandable manner. If this does not happen and spouses remain silent, perhaps due to misunderstandings, the State arbitrarily selects as administrator one spouse or the other. The mutually agreed estate administration proposed by the bill does not lead to genuine equality given the prevailing gender roles in Chile that could be achieved by a co-administration of marital assets, handing decision making power and control to women.

7. **Special temporary measures to accelerate de facto equality.** Positive discrimination (also known as affirmative action) is one type of special temporary measure recognised in the human rights field as facilitating equality of opportunity, that otherwise relies on being brought about nominally or formally. At present the State is dwelling on what steps to take towards substantive rights equality

² Legislative Bulletin 7567-07, April 2011 (the Legislative Bulletin, managed by the National Library of Congress, is where State bills, laws and legislation are published publicly).

for women and Parliament has debated the possibility of adopting positive discrimination policies³, but no significant progress has been reported to date. Chile will hold municipal elections later this year, and Parliamentary ones in 2013 and the forecast is for no significant increase in the number of female candidates or potential winners. The periodic report announces that SERNAM will work towards strengthening women's political participation, including a desired 40% increase in the number of female councillors in 2015. It is not, however, explained how this will be achieved. Conversely, the adoption of positive discrimination measures was rejected by the anti-discrimination bill recently approved by Congress⁴.

Economic autonomy and work

8. Difference in salary. A positive step forward during the period of review is the enactment of law 20,348 safeguarding equality of pay⁵. However, in mid-2011 the Superintendence of Pensions declared the salary gap would have increased by 17%⁶. A Department of Labour study compiled one year after the law's declaration confirms "a low degree of obligation compliance on behalf of the employer" and in addition to the limited promotion and training relating to its implementation, "the law is little known and the unions surveyed don't understand clearly how to exercise this right"⁷. The State is required to adopt additional, non-regulatory tools to create a new culture of equal treatment between men and women in the world of work. This is particularly relevant given that the law holds the worker individually responsible for speaking out against discriminatory practices, as well as taking into account the INDH's National Human Rights Survey 2011 that found 66.4% of Chileans believe that by standing up for their labour rights they run the risk of losing their job⁸.

9. Labour force participation. The State reports on ongoing programmes to increase participation of women in the labour force, with special emphasis on programmes working in cooperation with the poorest fifth of the population, within which are recorded the lowest rates of employment linkage and the highest rates of unemployment⁹. In fact, female labour participation has increased in the last few years: SERNAM measures it at 47.8% at the end of 2011 (still 26 percentage points below male participation) and reports that 63% of the 211,000 jobs created in 2011 were filled by women. However, the concern is that this statistic is based on precarious and unstable employment. Indeed,

³ Bulletin 5553-06, a bill that establishes equality between men and women to the access and fulfilment of jobs dependent upon popular election, introduced in December 2007.

⁴ Bulletin 3815-07, Establishing Measures against Discrimination Bill, introduced in March 2005.

⁵ Law 20,348 incorporates into the Labour Code the right to equal pay between men and women undertaking the same job. Published in the State's Official Gazette, 19 June 2009.

⁶ Emol.cl, Figures from the Superintendence of Pensions: The wage gap between men and women has grown and now stands at 17%, 3 September 2011. Women have a lower average wage than men and the gap is increasing with age rating, reaching 31.9% over the 13 years of study. (Social policy report, Ministry of Social Development (MIDEPLAN) 2011).

⁷ Department of Labour (2011). "The right to earn the same. Law 20,348, pay equality between men and women". Labour issues N° 27.

⁸ National Institute of Human Rights, First National Human Rights Survey, 2011, available at www.indh.cl

⁹ By disaggregating female participation in the labour force into fifths it is evident that the rate in the poorest section of society is substantially less than that of higher income sections: the rate is 25.5% in the first quintile, 35.1% in the second, 43.3% in the third, 51.7% in the fourth, and 58.7% in the fifth. In terms of unemployment

specialised bodies claim that 47% of these female jobs are self-employed roles, and 34% salaried: “Self-employed work observed in this period is mainly unstable, with high rates of part time work and lowly qualified workers”.¹⁰ In terms of salaried employment, 100% relates to “sub-contracting, temporary services, and the supply of personnel and recruiters, signifying greater instability in the world of work”¹¹.

10. The periodic report mentions the passage of public policy laws and initiatives like the Levelling-off Model and the best labour practices code on non-discrimination. Advances made show that, although necessary, such measures remain insufficient in altering the cultural norms that limit women’s participation in the labour force, and in overcoming discrimination that entrenches unstable, unprotected and badly paid work. Many regulations are not common knowledge and not upheld sufficiently for changes to occur, as is the case of equal pay and sexual harassment laws.

11. Work contracts and labour conditions. In 2011 the Government presented the results of the first National Survey of Employment, Work, Health and the Quality of Life of Workers in Chile, 2009-2010. The INDH recognises the importance of this study in understanding the link between the conditions of employment, work and health. Its results demonstrate that in the private sector women have less access to written contracts than men; 70% and 85.9% respectively. The disaggregated data by levels of education shows that most women without contracts are those with less formal education (49.6% not having completed school, as compared to 88.7% who have completed university level education). Alternatively, women are far more likely to engage in verbal contracts, especially in the service and commercial sectors (34%), in which female employment abounds.

12. Reproductive work and labour conditions. Given the link between high rates of female reproductive work and family care at home, and low rates of female participation in the labour force, the periodic report notes that public policy is attempting to make family and work more compatible¹². While such policies have been directed primarily at women, thereby reinforcing the cultural norm that women are responsible for domestic chores and child care¹³, it is worth noting that reforms aimed at strengthening joint responsibility have been introduced¹⁴. Nevertheless, the low percentage rate of men opting to take up care responsibilities under these postnatal reforms (just 0.6% of new fathers have used their full 7-week paternity leave entitlement) demonstrates that

the pattern of inequality is repeated: 32.6% in the first quintile and 5.6% in the fifth. (National Socioeconomic Survey (CASEN) 2009).

¹⁰ Fundación Sol. Employment report N° 4, July – September 2011. Labour Statistics Unit.

¹¹ Ibid.

¹² According to the National Institute of Statistics’ National Labour Survey, the main reason why women have fewer links to the labour market is due to domestic work and care of children or the elderly (36.7%), followed by academic studies (19.2%). National Labour Survey, quarterly report January-March 2011, National Institute of Statistics.

¹³ 83% of women claim sole responsibility for the carrying out of domestic chores, including child raising and care. UNDP: Human Development in Chile 2010, Gender: the challenges of equality.

¹⁴ Law 20,545, which modifies maternity protection regulations and incorporates postnatal parental leave, passed in October 2011. Essentially, the new law allows for the choice of an extra 3 months of leave, in addition to the previous 3 months. Therefore, mothers adhering to the necessary financial prerequisites are able to access up to 6 months of maternity leave. The law also allows fathers to access up to seven weeks of paternity leave, if the mother agrees.

associated cultural resistance still prevails in Chilean society. Generally, paternal child care benefits granted by the legislation are only accessed in the absence of the mother.

13. Domestic workers in private homes. It is estimated that approximately 300,000 women work in this sector, including a large number of immigrants¹⁵. The periodic report documents legislative steps taken in changing the minimum wage, the right to rest on public holidays, and maternity leave, plus the passage of a bill putting a domestic worker's work-week (sometimes up to 72 hours) on a par with the standard regulatory 45 hours per week. The scrapping of this arbitrary distinction must be effectively supervised, especially given that legislative non-compliance in so many cases derives from discrimination based on socioeconomic status, ethnic origin or nationality¹⁶.

Sexual and reproductive health and rights

14. Teen pregnancy. In Chile 48% of teenage mothers belong to the socioeconomic level below the poverty line, and 74% of these to the two lowest earning quintiles¹⁷. Of the mothers between 15 and 19 years old, 54.5% come from the poorest rural parts of the country¹⁸. 80% of all teenage mothers drop out of their academic studies.

15. The reduction in teen pregnancy was a health objective for the period 2000-2010, with a target of reducing the birth rate of teens between 15 and 19 years old to 46 per 1000 live births, and of girls between 10 and 14 years old to 0¹⁹. Evaluation of evidence shows that in 2007 the teens' rate measured 53.4, while that of the younger girls did not drop below 1.2. Health authorities have therefore maintained the target of reducing teen pregnancy in the National Health Plan for Achieving Health Objectives 2011-2020²⁰.

16. A step forward during this period has been the passage in February 2010 of Law 20,418 "Setting Standards on Information, Guidance and Services in Fertility Regulation". Its promulgation settles a long debate surrounding emergency anti-contraception and the age limit at which young girls and women can access the anti-contraceptive pill²¹. In spite of this women continue to encounter problems in accessing anti-contraceptives, emergency anti-contraception in particular. The law

¹⁵ 70% of Peruvian women in Chile carry out domestic work in private homes. Núñez, Nuria y Torres, Carmen (2007), "Peruvian women migrants and reproductive health", UNFPA and the Fundación Instituto de la Mujer, Santiago.

¹⁶ For further information see www.sintracapchile.cl

¹⁷ National Standards on Fertility Regulation, at: www.bcn.cl/carpeta_temas/temas_portada.2006-10-03.7146246056/mas-documentos-sobre-embarazo-adolescente/NormasFertilidad%20MINSAL.pdf, p. 122.

¹⁸ Ministry of Health (2009). Audit of Teen Pregnancy in Chile.

¹⁹ Ministry of Health. Health Objectives 2000-2010. Available at www.epi.minsal.cl. At the beginning of the decade the respective rates were 65.4 and 1.7 per 1000 live births.

²⁰ Ministry of Health. Strategic Health Objectives, draft consultation document. Final Draft, 10 November 2010.

²¹ The Fertility Regulation Rules allowed its distribution across the public health network at the request of any woman in need. A Constitutional Court ruling (ROL 740-07-CDS) later repealed the service and limited its distribution to cases of sexual assault. Then, the Ministry of Health granted Municipal authorities the power to distribute the pill or not (as autonomous entities in charge of their own health services). The Comptroller's Office subsequently ruled that the Municipalities did not have this authority (Ruling 31,356, 16 June 2009).

provides no implementing regulation, and therefore the continued discretion of numerous public bodies regarding its free distribution is affecting the exercise of previously guaranteed rights. According to a study by FLASCO²² in 2010, a third of health clinics fail to provide the emergency contraceptive pill to those in need²³. Appropriate and informed access to anti-contraceptive methods is key to the fulfilment and exercise of reproductive and sexual rights. The State must make available the economic and technical resources necessary for the exercise of these rights, particularly access to emergency anti-contraception.

17. In Chile all forms of abortion are subject to criminal punishment, despite the recommendations of different organizations charged with overseeing treaty compliance, including the CEDAW Committee. Nevertheless, the abortion debate in certain circumstances has taken place in numerous ways, including specific cases within the press. In fact, abortion was one of the issues addressed in the last Presidential election campaign, notably in relation to the repeal in 1989 of therapeutic abortion. Various bills have been drafted in Parliament proposing reforms to existing legislation in order to allow the regulation of abortion in certain cases where the health and life of the mother is at risk, for reasons of serious foetus malformation, and for rape. However, these bills have not progressed beyond Parliamentary debate, with three recent bills calling for abortion legislation having been rejected²⁴.

Right to a violent-free life

Trafficking

18. Chile is a country of origin, transit and destination in the trade of men, women and children with the specific purpose of sexual and labour exploitation. Although beyond the review period of the country report, the INDH deems the new April 2011 criminal classification of human trafficking as a step forward. In addition to sexual exploitation it amplifies the crime to include forced labour or services, servitude or slavery or other related practices, or the extraction of organs²⁵. The reforms do not include the internal trafficking of people, even though this still takes place across Chile.

19. Despite the periodic report referring to the creation of the Multi-Sector Board on People Trafficking whose objective it is “to coordinate action, plans and programmes of the various institutional actors in the prevention, suppression and punishment of people trafficking, especially women and children”, it has not been possible to ascertain its action plan, the work it has

Finally, law 20,418 reinstated the service and allowed the pill’s distribution throughout the health system to any woman in need.

²² The Faculty of Latin American Social Sciences.

²³ Dides, Claudia et al. Distribution of the emergency anti-contraceptive pill in Chile’s Municipal health system. Status report 2010. FLASCO, Santiago.

²⁴ The rejected bills are: 1) Therapeutic termination of the pregnancy (Bulletin 6522-11) presented by Senator Camilo Escalona in May 2009; 2) Modification of the Health Code to incorporate the cutting short of a pregnancy in certain cases (Bulletin 6591-11) presented by Senators Guido Girardi and Carlos Ominami in July 2009; 3) Decriminalizing pregnancy termination for medical reasons (Bulletin 7373-07) presented by Senators Evelyn Matthei and Fulvio Rossi in December 2010.

²⁵ Law 20,507, 8 April 2011.

undertaken nor the results of these²⁶. A serious problem remains of lack of production and compilation of information surrounding trafficking, making an accurate diagnosis difficult to come by. Chile does not have a registration system which would allow greater understanding of the problem, the type of exploitation, identification of where it is taking place, the identifying of victims by sex, nationality and age, plus other information necessary for the prevention and alerting of the problem, and victim protection. Few public bodies, including the National Office for Minors (SENAME) and the Investigative Police, have relevant programmes or trained staff.

20. In May 2011 it was reported that a group of Paraguayan citizens was the subject of labour exploitation, a case in which the INDH has lodged a legal complaint. A group of individuals were rounded up and transported to Chile with the idea of undertaking what can be classified as at least something similar to forced labour, in poor human and working conditions. The case has currently been suspended at the investigation stage given the poor health of the main individual accused. In virtue of its human rights obligations the State must investigate and penalise with due diligence anyone responsible, and provide the Paraguayan citizens with protection and redress. During 2012 the INDH has lodged two further legal complaints: one for the exploitation of women from the Dominican Republic, and the other for labour exploitation of Peruvian citizens. Both are currently underway in the courts.

Access to justice

21. The eradication of violence and discrimination against women requires comprehensive policy making, and although the Chilean State has addressed issues in this area, much remains to be done. The lack of understanding and training in gender issues of key players, and shortcomings in legal proceedings as a result of few women holding positions of power in the administration of justice²⁷ are just some of the weaknesses the State has to overcome in order to satisfy the demand for justice in the broad sense.

22. The passage of law 20,480, widening the scope of the crime of parricide (to include a former spouse and cohabitant) and determining the aggressor as having committed femicide is a step forward. Nevertheless, access to justice remains one of the main problems in the protection of women's human rights.

²⁶ During 2011 the INDH sent the Ministry of the Interior two official requests for this information (N° 196 and N° 493, 4 May and 16 August respectively) but to date has received no reply.

²⁷ Numerous studies show how gender diversity in the composition of seats of power and decision making impacts upon the type of decision taken and sentence applied. In Chile, the quantity of women in different courts across the country is as follows: it rose from 20% to 35% between 1995 and 2009 (including Supreme Court, Courts of Appeal and Constitutional Court); however, they continue to constitute just 30% of Ministers and 32% of Court presidents. The first woman in the Supreme Court was María Antonia Morales in 2001. (UNDP: Human Development in Chile 2010, Gender: the challenges of equality). A similar situation exists in the Attorney General's Office (Ministerio Público): 28% of public prosecutors are women and only one is a regional public prosecutor (out of a total of 18). In the Legal Aid Office (Defensoría Penal Pública) only one regional office is headed by a woman. (Information taken from the websites of the Attorney General's Office and the Legal Aid Office, August 2011).

23. The State has still not produced information or statistics relating to the magnitude of the problem. However, studies by public bodies have deduced that at least 1 woman in 3 has experienced domestic violence while living with their partner²⁸, and public safety and court statistics show a steady increase in the number of incidents of violence and cases proceeding to court in recent years²⁹. Legal settlement of criminal cases show the proportion of extra-judicial settlements thrown out by the system has not changed substantially, neither has the relationship between convictions and conditional suspended sentences, signifying a worrying pattern of sentencing³⁰. Elsewhere, in the family courts the information provided by the Administrative Corporation of the Judiciary does not allow differentiation between convictions and conditional suspended sentences.

24. **Femicide.** Efforts by the Judiciary and the Attorney General's office have focused on granting measures to protect the life and wellbeing of women seeking to report violence as quickly as possible. Government policy has tasked itself with increasing the number of care centres and shelters for assaulted women across the country. Such initiatives highlight the concern to improve the protection of women living in risk of violence from their partners or former partners. However, the high rate of femicide in the country³¹ and the discovery in numerous cases that victims had been granted protection measures show that the current response is still insufficient in dealing with such a widespread and complex phenomenon. It must be pointed out that no information exists in the criminal or family courts regarding compliance or non-compliance of preventive measures or suspended sentence conditions, making the required political response and its evaluation all the more difficult.

25. **Campaigns and prevention.** Violence towards women is deeply entrenched in Chilean society. Its eradication relies on prevention and treatment in the public services and the prosecution of those whom commit it. All three of these approaches are integral to tackling the problem, but have been disaggregated and not equally developed in Chile. The State's response, as across most of Latin America, has focused on the judicial and criminal dimension and subsequently resulted in an insufficient protection of the citizen to whom it is obliged to protect. What is needed is concerted and sustained political and institutional will to develop preventive measures that include permanent campaigns and a rights-based focus.

²⁸ The Ministry of the Interior's 2008 National Victims of Crime Survey shows that the rate of female domestic violence is 35.7%. The data relates to women over 15 years of age who have lived with a partner; it therefore excludes violence taking place within non-cohabiting couples and sexual assault committed by family members. Available at www.seguridadpublica.gov.cl/files/presentacion_violencia_intrafamiliar_v2.pdf.

²⁹ The Ministry of the Interior reports that the number of domestic violence complaints has grown from 390.3 per 100,000 inhabitants in 2001 to 638.5 per 100,000 inhabitants in 2010. Similarly, the Attorney General's Office states that 53,963 cases were reported in 2007 compared to 117,145 in 2010.

³⁰ Legal settlements were 50.6% in 2008 and 56.5 in 2010, according to Attorney General Office figures. Of these, convictions were 9.5% and 9.9% respectively. Extra-judicial settlements have varied from 49.4% to 43.4% in the same time period.

³¹ According to information from the Chilean Network against Sexual and Domestic Violence, from 2001 until the present there have been more than 500 murders of women for reasons of gender. Available at www.nomasviolenciacontramujeres.cl

Education

26. The means of coverage within the education system have long ceased to present gender gaps. However, reasons for drop out or educational assistance (National Survey of Socioeconomic Patterns, *CASEN*, 2009) relate to traditional patterns of gender: men drop out for work, women for reproductive and domestic work reasons. Educational shortfalls prevail in certain groups of young women and girls, such as those with irregular immigration status or refugees who cannot access the education system due to a lack of documentation proving their previous studies. Although the Ministry of Education has regulations addressing this issue, they do not contain provisions in response to these particular needs. Youngsters in detention face a similar situation. Numerous juvenile detention centres lack schools or regular education programmes, only 31% of women in detention centres access the school reintegration process, and those in semi-closed facilities requiring reinsertion back into regular education face segregation, which often leads to self-exclusion and low school attendance, especially in the standard system³².

27. **Sex education.** Opposing views on how best to teach this subject have resulted in an ambivalent education policy which places primary responsibility within the family, while giving “full planning and programming autonomy to the relevant institutions according to their particular community educational requirements”. The State has a responsibility of educational promotion and regulation and cannot delegate this in the name of freedom of education. Of the seven programmes implemented by the Ministry of Education in accordance with SERNAM during 2011, at least two fail to conform to human rights standards enshrined within CEDAW or other treaties as they limit the self-control of reproductive health to unique and limited responses of a hetero-regulatory character: meaning the only viable family unit in society is one built around heterosexual relations. This is likely to entrench discriminatory practices against people with alternative sexual or gender orientation³³. This is concerning, especially given that these programmes are not free of charge and that schools must compete for funding in order to help cover the costs.

28. **Obstacles deterring pregnant teenagers from staying in the school system.** In 2010 there were 4,806 cases of teen pregnancy and 7,803 teenage or adolescent mothers registered by the School

³² Cross-sector Management Unit of the Department of Youth Justice, SENAME, sent on 9 September 2011, but relates to information registered as of 30/06/2011

³³ Programme reviews (and not their complete content) can be found on the website of the Ministry of Education (http://www.mineduc.cl/index1_int.php?id_portal=55&id_seccion=3354&id_contenido=13646) and relate to: ‘Learning to Want’ (Alliance for the Family); ‘Adolescence: Decision Making Time’ (Centre of Reproductive Medicine and Complete Adolescent Development); ‘Sexuality, Self Esteem and Prevention of Adolescent Pregnancy’ (Chilean Association of Family Protection); ‘Complete Sex Education Course’ (Complete Sex Education Centre); ‘Sexuality and Emotional Learning Programme’ (Faculty of Social Sciences, University of Chile); ‘Values, Emotions and Sexuality Education Programme’ (San Sebastián University); and ‘Teen Star’ (Catholic University of Chile). On the basis of the information content of these programmes, as well as the fact that schools are able to choose one or another according to their preference, the INDH views two of them as lacking in respect for international human rights standards surrounding varied and safe anti-contraceptive methods, sexual health and reproductive rights, and non-discrimination in terms of sexual diversity: ‘Learning to Want’ and ‘Complete Sex Education Course’. Another two are unclear as to their indication of anti-contraceptive methods and whether or not they respect sexual diversity and gender orientation: ‘Values, Emotions and Sexuality Education Programme’ and ‘Teen Star’.

Assistance and Scholarship Board's (JUNAEB) department of student health, and 65 complaints received by the Ministry of Education concerning failure to respect pregnant or mother students' right to education. During the first semester of 2011 42 similar complaints were made. The percentage of institutions in which parents claim knowledge of expulsions or suspensions from school for this reason reached over 10% in the Municipalities, 25% in subsidised private schools and 28% in non-subsidised private schools³⁴. This proves that despite its prohibition in 2000³⁵, there is little capacity to prosecute and eradicate discrimination practices that are not dealt with through the courts. In its periodic report the Government does not refer to significant steps taken towards the adoption of measures that would facilitate these young women to continue with their studies.

29. Gender equality constitutes one of the Cross-cutting Learning Objectives (Objetivos de Aprendizaje Transversal) within in the school course curricula³⁶, but it has not been integrated explicitly into any course, or the promotion of courses, except for History, Geography and Social Sciences. Furthermore, the use of inclusive (meaning non-gender specific) language in the curricula has been eliminatedⁱ. The Objectives of these curricula state: "In this document the following terms are used inclusively – *"el docente"* (teacher), *"el estudiante"* (student), *"el profesor"* (teacher), *"el alumno"* (pupil), *"el compañero"* (classmate)ⁱⁱ and their respective plurals (other similar words within an educational context); meaning, they refer to both men and women. This option follows the universal understanding that gender discrimination in the Spanish language is unavoidable, other than using *"o/a"*, *"los/las"* or other similar constructions to refer to both sexes together, which tends to cause visual saturation and impede reading comprehension".

CONVENTIONS TO RATIFY

- CEDAW Protocol
- ILO Convention No. 189 concerning domestic workers, 2011
- ILO Convention No. 183 concerning maternity protection, 2000
- ILO Convention No. 184 concerning safety and health in agriculture, 2001
- Protocol of San Salvador

Document translated by Alexis Psarras

³⁴ Questionnaire of tenth graders' parents, Ministry of Education 2010.

³⁵ Law 19,699, 5 August 2000.

³⁶ The General Education Law 20,370, 2 June 2010 establishes educational targets that must express learning objectives, which in turn must be developed by the Ministry of Education before then being approved by the National Education Council. The new curricula were approved in January 2012 (Decree: DS N°439/2012) and establish two types of learning objectives: those particular to each course and other more cross-cutting in character which "set in place students' personal development and moral and social conduct".

ⁱ This point is a linguistic one specific to the Spanish language and refers to the gendering of nouns. Spanish nouns have either a masculine (*"el/los/o"*) or a feminine (*"la/las/a"*) form, and therefore their use can cause gender bias in one way or another, in a way which does not occur in English.

ⁱⁱ Therefore all masculine noun forms.

CINQUIÈME ET SIXIÈME RAPPORTS PÉRIODIQUES DU CHILI DEVANT LE COMITÉ DE LA CEDAW

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

1. Le Chili accorde une attention particulière aux droits des femmes, d'où la réforme et l'adoption, au cours des deux dernières décennies, de lois et de réglementations et la mise en œuvre de politiques publiques visant à garantir l'exercice de ces droits. Le rapport d'État rend compte de ces avancées pendant la période 2006-2010. Bien que les deux dernières années ne fassent pas l'objet de l'examen du Comité, il convient de souligner qu'en 2011 et 2012, de nouvelles mesures ont été concrétisées, telles que la prolongation du congé maternité postnatal à six mois, tandis que d'autres mesures sont en cours de traitement législatif, telles que la réforme du régime de société conjugale, ce qui reflète bien la volonté du Chili d'avancer dans le respect des droits des femmes.

Cela étant, des normes, pratiques et discours institutionnels, sociaux et culturels perpétrant une place de subordination des femmes et la violation de leurs droits restent d'actualité dans la société chilienne. Que ce soit dans la sphère privée ou dans la sphère publique, les femmes s'achoppent encore à des barrières et obstacles qui limitent leur autonomie dans leurs projets de vie et le plein exercice de leurs droits sur un pied d'égalité avec les hommes.

2. L'État doit produire des données suffisantes et cohérentes, ventilées par sexe et autres facteurs comme l'âge, la nationalité ou l'ethnie qui au fil de l'histoire ont été source de discrimination. En effet, les lacunes d'informations entravent la prompt observation des obligations de promotion, de respect et de garantie des droits des femmes au Chili et rend difficile le contrôle de l'application de normes et de politiques visant à combler l'écart entre hommes et femmes en matière d'emploi, de politique, de santé, d'éducation et de culture.

3. Les programmes pour l'égalité des chances entre hommes et femmes guident les politiques publiques en faveur des droits des femmes depuis 1994¹. Le dernier gouvernement a évalué les résultats de la période 2001-2010 – dont les avancées sont exprimées dans le rapport de l'État au Comité – et proposé un nouveau programme pour la période 2011-2020. Celui-ci s'articule autour de principes directeurs d'égalité et de non-discrimination, d'autonomie et de coresponsabilité sociale devant orienter l'action publique. Il est particulièrement inquiétant que cette politique puisse être discontinuée et qu'à ce jour, il n'ait pas été fixé d'objectifs, des cibles et des résultats à atteindre avant la fin de la présente décennie. Pour éradiquer la discrimination faite aux femmes et garantir le plein exercice de leurs droits, il est indispensable que l'État mène une action soutenue dans le temps et formule des politiques à long terme incluant des objectifs et cibles mesurables.

4. Les axes de travail annoncés par le SERNAM² pour la période 2010-2014 sont les suivants : i) entrepreneuriat des femmes ; ii) intégration des femmes au marché du travail dans le respect de l'équilibre familial ; iii) diminution de la violence familiale et lutte contre la destruction de la famille ; iv) promotion de la participation des femmes dans le domaine public ; et v)

¹ Premier Programme pour l'égalité des chances pour la période 1994-1999; deuxième Programme pour l'égalité des chances pour la période 2000-2010.

² NdT : Le SERNAM ou Service national de la Femme est un organisme d'État créé en 1991 pour promouvoir l'égalité des chances entre hommes et femmes.

renforcement de la famille en tant que base de la société. On peut applaudir la volonté du SERNAM d'étendre des programmes qui renforcent la participation des femmes au marché du travail et à la sphère publique et sa lutte pour l'éradication des violences au sein de la famille. Néanmoins, l'Institut national des droits de l'homme (INDH) s'inquiète particulièrement de l'accent mis sur le rôle prioritaire des femmes dans la famille et du fait que le modèle familial traditionnel soit privilégié au détriment d'une notion plurielle. Les femmes forgent leurs espaces affectifs et familiaux d'une myriade de façons qui toutes, méritent d'être respectées et protégées.

5. Le rapport du Chili fait le point sur l'impact inégal de la législation et des politiques publiques visant à mettre fin à la discrimination et à garantir aux femmes le plein exercice de leurs droits. La pauvreté, la vie en milieu rural, l'appartenance ethnique et la nationalité, ainsi que l'âge et l'orientation sexuelle, entre autres situations et aspects, influencent fortement les possibilités concrètes des femmes et complexifient et multiplient les volets de la discrimination et de la violation des droits des femmes, ce que reflète bien le cas de Gabriela Blas. Cette bergère aymara a été accusée d'abandon ayant pour résultat la mort de son fils de trois ans et condamnée à douze ans de prison par les tribunaux chiliens. Dans son rapport annuel 2011 sur l'état des droits de l'homme au Chili, l'INDH signale que ce cas illustre que le système de justice est le dernier maillon du rapport entre l'accusée et l'État qui renforce l'exclusion sociale et la discrimination, constatées auparavant dans d'autres domaines institutionnels. Bien que ce diagnostic soit connu – mis en lumière par les profils épidémiologiques, les écarts de salaires homme-femme, la participation au marché du travail et la prévalence du fémicide, entre autres – l'action de l'État reste encore faible dans la lutte contre la discrimination à l'égard des femmes et l'exercice des droits fondamentaux.

OBSERVATIONS SUR LE RAPPORT INITIAL SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA CEDAW

Égalité et non-discrimination

6. **Réforme du régime de société conjugale.** Bien que cette réforme ne s'inscrive pas dans la période d'analyse qui fait l'objet du présent rapport, il convient de souligner la présentation par l'Exécutif d'un projet de loi modifiant le *Code civil et d'autres lois portant sur le régime patrimonial de société conjugale*³. Cette réforme est un pas remarquable vers l'égalité des sexes en ce sens qu'elle donne aux femmes la possibilité d'administrer leur propre patrimoine et les revenus de la société conjugale. Des dispositions pouvant violer le principe d'égalité sont néanmoins maintenues, parmi elles, on peut citer la société conjugale comme régime supplétoire et la désignation d'un commun accord du (de la) conjoint(e) comme administrateur ou administratrice du patrimoine familial. L'État a l'obligation d'informer les personnes désirant souscrire un accord de mariage sur les diverses modalités de gestion du patrimoine de manière à ce qu'elles prennent une décision en toute connaissance de cause. En effet, si au contraire, devant le silence des parties – qui peut être dû à leur méconnaissance sur la question – l'État décide en leur nom de l'une ou l'autre des modalités, cela revient à une procédure arbitraire. Concernant la gestion du patrimoine de la société conjugale, le commun accord proposé par le projet ne permet pas d'avancer vers une véritable parité compte tenu des rôles de genre présents au Chili. En revanche, la gestion conjointe des avoirs conjugaux donne aux femmes un pouvoir de décision et de contrôle sur le patrimoine familial.

7. **Mesures spéciales à caractère temporaire pour accélérer l'égalité de fait.** La discrimination positive est une mesure spéciale à caractère temporaire reconnue en matière de droits de l'homme. Elle permet de concrétiser l'égalité des chances pour le moment uniquement

³ Bulletin législatif N° 756707, avril 2011.

nominale ou formelle. L'État est en retard dans l'adoption de mesures pour avancer vers une véritable égalité, exprimée par un exercice équitable des droits des hommes et des femmes. Au parlement, on a envisagé d'adopter des mesures de discrimination positive notamment pour aller vers une représentation politique homme femme équilibrée⁴. Le projet de loi n'a jusqu'à présent pas beaucoup avancé. En 2012, des élections municipales auront lieu au Chili et l'an prochain, ce sera le cas des élections parlementaires. D'après les prévisions, le nombre de candidates et de femmes éventuellement élues ne devrait pas augmenter significativement. Dans son rapport, l'État annonce que le SERNAM travaillera pour encourager la participation politique des femmes et espère même une augmentation du nombre de conseillères municipales à hauteur de 40 % d'ici 2015, mais le rapport ne précise aucune mesure spécifique pour atteindre cet objectif. D'autre part, l'adoption de mesures de discrimination positive a été écartée du projet de loi contre la discrimination récemment approuvé par le Congrès.⁵

Autonomie financière et emploi

8. Écarts de salaires. Parmi les progrès enregistrés dans cette période, on peut citer l'entrée en vigueur de la loi n° 20.348 qui assoit l'égalité des rémunérations afin que le sexe ne soit pas un facteur de discrimination⁶. Néanmoins, mi 2011, la Superintendencia de pensiones⁷ a informé que l'écart des salaires avait augmenté de 17 %⁸. Une étude de la Direction du travail réalisée un an après l'adoption de la loi a révélé « un faible degré d'observation des obligations fixées par la loi pour les employeurs », ainsi que les lacunes en matière de promotion et de formation sur la mise en œuvre de la loi. Il en découle que « la loi est peu connue et les syndicats consultés ne savent pas bien comment faire valoir ce droit⁹ ». L'État est invité à adopter des outils complémentaires, non seulement normatifs, mais destinés à créer une culture d'égalité de traitement entre hommes et femmes sur le marché du travail. Ceci est particulièrement important à l'heure où la loi encourage auprès des travailleuses la dénonciation de pratiques discriminatoires, dans un contexte où selon l'Enquête nationale sur les droits de l'homme en 2011 menée par l'INDH, 66,4 % des employés chiliens perçoivent qu'en défendant leurs droits, ils risquent d'être licenciés¹⁰.

9. Participation au marché du travail. Le gouvernement fait le point sur les programmes mis sur pied pour augmenter la participation des femmes au marché du travail, en mettant l'accent sur les femmes des quintiles les plus pauvres, où la participation au marché du travail est plus

⁴ Bulletin 5553-06, projet de loi présenté en décembre 2007 prévoyant l'égalité homme femme dans l'accès aux postes d'élection populaire et l'exercice de ces fonctions.

⁵ Bulletin 3815-07, projet de loi présenté en mars 2005 et prévoyant des mesures contre la discrimination.

⁶ Loi n° 20.348 incluant au Code du travail le principe d'égalité des rémunérations pour les hommes et les femmes exécutant les mêmes fonctions. Publiée au Journal officiel le 19 juin 2009.

⁷ *NdT* : La Superintendencia de Pensiones est un organisme de contrôle représentant l'État au sein du système de retraites.

⁸ Emol.cl, Cifras de la Superintendencia de Pensiones : la brecha de sueldos entre hombres y mujeres crece y alcanza 17% (Données de la Superintendencia de Pensiones : l'écart de salaires entre hommes et femmes se creuse et atteint 17 %), 3 septembre 2011. En moyenne, les femmes perçoivent un salaire inférieur à celui des hommes. Plus la formation est poussée, plus l'écart se creuse, atteignant 31,9 points pourcentuels au-delà de 13 ans d'études (Rapport de politique sociale. Ministère de la Planification 2011).

⁹ Direction du Travail (2011). « El derecho a ganar lo mismo. Ley N° 20.348, igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres » (Le droit à un salaire équitable. Loi N° 20.348, égalité de rémunérations entre hommes et femmes). Temas laborales N° 27.

¹⁰ Institut national des droits de l'homme, première enquête nationale sur les droits de l'homme, 2011, disponible sur www.indh.cl

faible et le taux de chômage plus élevé¹¹. D'ailleurs, la participation des femmes au marché du travail a augmenté au cours des dernières années : le SERNAM estime que fin 2011, 47,8 % des femmes étaient sur le marché du travail – soit encore 26 points au-dessous de la participation masculine – et signale que 63 % des 211 000 emplois créés cette année ont été occupés par des femmes. Cependant, il est alarmant qu'il s'agisse essentiellement d'emplois précaires et instables. En effet, des entités spécialisées soulignent que 47 % des femmes concernées sont à leur compte, tandis que seuls 34 % d'entre elles sont salariées : « le travail indépendant observé pendant cette période est essentiellement précaire, on enregistre un grand nombre d'emplois à mi-temps et de travailleuses peu qualifiées »¹². Quant aux emplois salariés, 100 % des nouveaux emplois correspondent à « de la sous-traitance, des services provisoires, intérimaires ou des emplois proposés par des agents, ce qui est un signe de précarisation et d'instabilité accrue sur le marché du travail »¹³.

10. Dans son rapport, l'État souligne l'approbation de lois et d'initiatives de politiques publiques telles que le Modelo Iguala et le code de bonnes pratiques au travail sur la non-discrimination. Les progrès exposés montrent que ces mesures, bien que nécessaires, restent insuffisantes pour renverser le modèle culturel qui limite la participation des femmes au marché du travail et pour mettre fin à la discrimination qui les cantonne à des emplois précaires, mal réglementés et sous rémunérés. Un grand nombre de normes ne sont pas assez diffusées et suivies dans la pratique pour que les changements se concrétisent, comme dans le cas de la loi sur l'égalité des rémunérations ou la loi sur le harcèlement sexuel.

11. Contrats et conditions du travail. Le gouvernement a présenté en 2011 les résultats de la première Enquête nationale sur l'emploi, le travail, la santé et la qualité de vie des travailleurs et travailleuses chiliens en 2009 et 2010. L'INDH se réjouit de l'utilisation de cet instrument qui montre les liens entre les conditions d'emploi, de travail et de santé. Ce sondage montre que sur le marché privé, les femmes ont moins accès que les hommes à des contrats écrits : 70 % et 85,9 % respectivement. La désagrégation de cette donnée par niveau de formation montre que ce sont surtout les femmes peu qualifiées qui ne sont formellement employées sur la base d'un contrat (seuls 49,6 % des femmes qui n'ont pas achevé l'enseignement primaire sont au titre d'un contrat, contre 88,7 % de celles qui ont fait des études supérieures). Dans l'ensemble, les femmes sont celles qui souscrivent le plus fréquemment des contrats verbaux et cette pratique est particulièrement fréquente dans le secteur tertiaire (34 %), c'est-à-dire là où les emplois féminins abondent.

12. Travail reproductif et participation au marché du travail. Compte tenu de la forte incidence du travail reproductif et des soins de la famille sur le faible taux de participation des femmes au marché du travail, dans son rapport, l'État rend compte de politiques publiques destinées à rendre compatibles la famille et le travail¹⁴. Même s'il est regrettable que globalement, les politiques dans ce domaine aient été exclusivement adressées aux femmes, en renforçant et en reproduisant le modèle culturel qui les rend responsables de la

¹¹ En désagrégeant ces données par quintiles, on constate que dans les secteurs les plus pauvres, la proportion de femmes sur le marché du travail est considérablement inférieure que dans les secteurs à revenus plus élevés : le taux est de 25,5 pour le premier quintile, 35,1 pour le deuxième, 43,3 pour le troisième, 51,7 pour le quatrième et 58,7 pour le cinquième. Il en va de même pour le chômage, qui touche 32,6 % du premier quintile et seul 5,6 % du cinquième. (Casen 2009).

¹² Fondation Sol. Minuta de empleo N° 4, juillet-septembre 2011. Unité Statistiques du Travail Ibidem.

¹³ Ibidem.

¹⁴ D'après le sondage national sur l'emploi de l'INE (Institut national des statistiques), la principale cause de non-participation des femmes au marché du travail est le travail domestique, notamment les tâches liées à la prise en charge d'enfants et de personnes âgées (36,7 %) ; suivi par les études (19,2 %). Sondage national sur l'emploi, trimestre janvier à mars 2011, INE.

reproduction et des soins¹⁵, il convient de souligner que des réformes ont été introduites à fin d'encourager la coresponsabilité¹⁶. Néanmoins, le faible pourcentage d'hommes qui choisissent d'assumer les fonctions de soins conformément aux dites réformes – au cours des trois premiers mois depuis l'entrée en vigueur de la réforme, seul 0,6 % des pères ont utilisé le permis parental que la loi leur accorde pour une durée allant jusqu'à sept semaines – montre les barrières culturelles qui persistent au sein de la société chilienne dans ces domaines. À cela s'ajoute qu'en général, la législation accordant des bénéfices au père dans l'éducation et les soins des enfants ne s'active qu'en cas d'absence de la mère.

13. Travailleuses domestiques. On estime que près de 300 000 femmes exercent un travail domestique et parmi elles, on dénombre beaucoup d'immigrées¹⁷. Dans son rapport, l'État rend compte des avancées législatives pour une augmentation du salaire minimum, le droit au repos les jours fériés et le droit à ne pas être licenciée pour raisons de maternité. On cite également la préparation d'un projet de loi visant à normaliser les horaires de travail des travailleuses domestiques (jusqu'à 72 heures par semaine) à l'image de la réglementation ordinaire (45 heures par semaine). L'élimination de cette distinction arbitraire doit s'accompagner d'un contrôle de l'application de la norme, notamment à la lumière du fait que dans de nombreux cas, l'inobservation de la législation s'associe à des discriminations fondées sur le niveau socio-économique, l'origine ethnique ou la nationalité des travailleuses, entre autres sources de discrimination¹⁸.

Santé et droits sexuels et reproductifs

14. Grossesse à l'adolescence. Au Chili, 48 % des mères adolescentes appartiennent à un niveau socio-économique au-dessous du seuil de pauvreté et 74 % d'entre elles aux deux quintiles du plus faible revenu¹⁹. 54,5 % des mères âgées de 15 à 19 ans vivent dans les zones rurales les plus pauvres à l'échelon national²⁰. 80 % des mères adolescentes arrêtent leurs études.

15. La réduction des grossesses chez les adolescentes est devenue un objectif de santé pour la période 2000-2010, dans le but de faire baisser à 46 pour 1000 naissances le taux de natalité des jeunes filles âgées de 15 à 19 ans et à 0 celui des filles de 10 à 14 ans²¹. L'évaluation des résultats montre qu'en 2007, le taux de natalité des jeunes était encore de 53,4 pour 1000

¹⁵ 83 % des femmes signalent être les seules à réaliser les travaux domestiques dont ceux liés aux soins et à l'éducation des enfants.

¹⁶ La loi n° 20.545 modifie les normes sur la protection de la maternité et institue le congé parental postnatal, adopté en octobre 2011. Globalement, la nouvelle loi prolonge le congé maternité postnatal de trois mois, période désormais appelée « permis parental ». Grâce à ce congé, les femmes qui décident d'en faire la demande et qui remplissent les critères d'affiliation à une caisse de retraite et y ont versé un certain nombre de cotisations peuvent accéder à un congé de maternité postnatal de six mois. La loi permet également au père d'accéder au même permis parental pour une durée ne pouvant excéder sept semaines et à condition que la mère soit d'accord.

¹⁷ 70 % des femmes péruviennes travaillent comme employées domestiques chez des particuliers. Nuñez, Nuria et Torres, Carmen (2007), « Mujeres migrantes peruanas y salud reproductiva » (Femmes migrantes péruviennes et santé reproductive), UNFPA et Fondation Institut de la femme, Santiago.

¹⁸ Pour plus d'informations, consultez <http://sintracapchile.cl>

¹⁹ Normes nationales sur le contrôle de la natalité, sur : http://www.bcn.cl/carpeta_temas/temas_portada.2006-10-03.7146246056/mas-documentos-sobre-embarazo-adolescente/NormasFertilidad%20MINSAL.pdf, p. 122.

²⁰ Ministère de la Santé (2009). Diagnostic de la situation des grossesses chez les adolescentes au Chili.

²¹ Ministère de la Santé. Objectifs sanitaires 2000-2010. Disponible sur www.epi.minsal.cl. Au début de la décennie, le taux de natalité était de 65,4 et de 1,7 pour 1000 naissances, respectivement.

naissances et celui des fillettes n'a pas baissé plus de 1,2 pour 1000 naissances. Il faut pourtant applaudir que l'autorité sanitaire ait gardé la réduction de la grossesse adolescence parmi les priorités du Plan national de santé en vue d'atteindre les Objectifs sanitaires 2011-2020²².

16. La promulgation, en février 2010 de la loi n° 20.418 qui « fixe des normes sur l'information, l'orientation et les prestations en matière de contrôle de la fécondité » figure aussi parmi les progrès relevés sur cette période. Son adoption met un terme à un long débat sur la contraception d'urgence et sur l'âge limite de libre accès des adolescences à la « pilule du lendemain »²³. Pourtant, les femmes continuent de rencontrer des difficultés pour accéder à des méthodes de contraception, particulièrement la contraception d'urgence. La loi ne dispose pas d'un règlement et dès lors les institutions publiques continuent d'exercer un pouvoir discrétionnaire sur la distribution gratuite de cette pilule, ce qui entrave l'exercice des droits garantis par la loi. D'après une étude réalisée par FLACSO en 2010²⁴, un tiers des *consultorios* (dispensaires de quartier) ne remet pas la PCU²⁵ aux femmes qui en ont besoin²⁶. L'accès opportun et informé à des moyens de contraception est déterminant pour garantir une véritable jouissance des droits sexuels et reproductifs. L'État doit mettre à disposition de la communauté les moyens financiers et techniques nécessaires pour l'exercice de ces droits, notamment le droit à l'accès à la contraception d'urgence.

17. Au Chili, l'avortement sous toutes ses formes est sanctionné au niveau pénal malgré les recommandations de différents organes chargés du suivi de la mise en œuvre de traités, dont le Comité de la CEDAW. Cependant, divers groupes politiques ont tenu un débat sur l'accès à l'avortement en cas de circonstances spécifiques, ce dont s'est fait l'écho la presse au travers de cas particuliers. D'ailleurs, ce thème a été abordé au cours de la dernière campagne électorale – notamment autour de la réinsertion dans la loi de l'interruption médicale de grossesse, abrogée en 1989. Au Parlement, plusieurs projets de loi ont été proposés pour amender la législation actuelle afin d'autoriser l'avortement dans les cas où la vie et la santé de la mère sont en danger pour raisons de malformation grave et incompatible avec la vie et pour viol ; néanmoins, les projets présentés ne sont pas parvenus à avancer dans le débat parlementaire. Il a récemment été décidé, suite à trois propositions en ce sens, de ne pas légiférer en la matière²⁷.

²² Ministère de la Santé. Objectifs stratégiques en matière de santé, projet. Révision finale, 10 novembre 2010.

²³ Les normes de contrôle de la natalité ont permis la distribution de la PCU dans le réseau d'assistance publique aux femmes qui en font la demande ; ensuite, la décision du Tribunal constitutionnel (ROL 740-07-CDS) a abrogé la prestation et limité l'octroi de la PCU à des situations de violences sexuelles. Ultérieurement, le ministère de la Santé a donné aux autorités municipales le pouvoir de décider de l'octroi de la pilule – en qualité d'organes autonomes responsables des services de santé de leur juridiction – ultérieurement, la Contraloría (organisme de surveillance de l'administration publique) a décrété que les communes n'avaient pas cette faculté. Finalement, la loi 20.418 restitue cette prestation et permet la distribution de la PCU dans les services de santé aux femmes qui la demandent.

²⁴ Faculté latino-américaine de Sciences sociales.

²⁵ Pilule contraceptive d'urgence (PCU)

²⁶ Dides, Claudia et coll. Entrega de la píldora anticonceptiva de emergencia en el sistema de salud municipal de Chile. Estado de situación 2010 (Octroi de la pilule contraceptive d'urgence dans le système de santé municipal chilien. État des lieux 2010). Flacso, Santiago.

²⁷ Les projets refusés sont les suivants : 1) projet sur l'interruption médicale de grossesse (bulletin 6522-11) présenté par le sénateur Camilo Escalona en mai 2009 ; 2) projet de modification du code de la santé signalant les cas où une grossesse pourrait être interrompue (bulletin 6591-11), présenté par les sénateurs Guido Girardi et Carlos Ominami en juillet 2009 ; 3) projet de dépénalisation de l'interruption de grossesse pour raisons médicales (bulletin 7373-07) présenté par le Sénatrice Evelyn Matthei et le sénateur Fulvio Rossi en décembre 2010.

Droit à vivre une vie sans violence

Traite de personnes

18. Le Chili est un pays d'origine, de transit et de destination de traite d'hommes, de femmes, de filles et de garçons à des fins d'exploitation sexuelle à des fins commerciales. Si cette avancée ne s'inscrit pas dans la période dont le rapport fait l'objet, l'INDH souhaite néanmoins souligner la nouvelle classification du délit de traite de personnes intégrée à la législation chilienne en avril 2011. Ainsi, outre l'exploitation sexuelle, ce délit est élargi à la notion de travaux ou services forcés, de servitude ou d'esclavage ou de pratiques analogues ainsi qu'à l'extraction d'organes²⁸. La réforme n'inclut cependant pas la traite interne de personnes, bien que des cas aient été enregistrés dans le pays.

19. Quoique dans son rapport, l'État évoque la création d'une table de travail intersectorielle sur la traite de personnes ayant pour mission « de coordonner des actions, plans et programmes des divers acteurs institutionnels en matière de prévention, répression et pénalisation de la traite de personnes, notamment de femmes et d'enfants », le plan de travail, les actions menées par cette table de travail et ses résultats demeurent inconnus à ce jour²⁹. L'INDH déplore le manque de production et de systématisation d'informations sur la traite, un grave problème qui empêche d'obtenir un diagnostic plus précis de la situation. Le pays ne compte pas de système de registre permettant de connaître l'étendue du problème, le type d'exploitation et d'identifier les lieux du pays où ce délit est le plus fréquent, les personnes touchées désagrégées par sexe, nationalité et âge ainsi que d'autres renseignements utiles pour la prévention et le traitement de ce problème et la protection des victimes. À noter également que seules quelques institutions publiques – le SENAME³⁰ et la *Policía de investigaciones* (police judiciaire chilienne) – ont mis en œuvre des programmes d'aide aux victimes et disposent de personnel qualifié.

20. En mai 2011, la dénonciation d'exploitation à des fins commerciales de citoyens et citoyennes de nationalité paraguayenne a été rendue publique. L'INDH a porté plainte à cet égard. Un groupe de personnes a été capturé, déplacé, transporté et reçu au Chili afin de réaliser des travaux pouvant être qualifiés de services forcés, ou du moins une forme analogue de travaux forcés, et ce, dans des conditions humaines et de travail déplorables. Le procès est arrêté à la phase d'enquête, en raison de l'état de santé du principal accusé. En vertu de ses obligations en matière de droits de l'homme, l'État doit conduire les enquêtes nécessaires, sanctionner avec célérité les responsables et protéger et indemniser les citoyens et citoyennes de nationalité paraguayenne dont les droits ont été violés. Au cours de l'année 2012, l'INDH a intenté deux poursuites en justice supplémentaires, une pour exploitation sexuelle de femmes originaires de République dominicaine et l'autre pour exploitation à des fins commerciales de citoyens péruviens. Ces poursuites sont actuellement traitées par les tribunaux de justice.

Accès à la justice

21. Éradiquer la violence et la discrimination à l'égard des femmes exige des politiques intégrales et l'État chilien a fait des efforts en ce sens, pourtant, certains aspects peuvent encore être améliorés. Les connaissances et la formation en matière de genre font défaut

²⁸ Loi n° 20.507, publiée le 8 avril 2011.

²⁹ En 2011, l'INDH a envoyé au ministère de l'Intérieur deux communications demandant ces informations (n° 196 et 493 du 4 mai et du 16 août respectivement), elles demeurent sans réponse à ce jour.

³⁰ Service national des mineurs

auprès des acteurs clés, des erreurs sont commises dans les procédures judiciaires et un nombre insuffisant de femmes occupent les postes à responsabilité de l'administration judiciaire³¹. Ce sont autant de faiblesses que l'État chilien doit surmonter pour satisfaire la demande en justice au sens large du terme.

22. La promulgation de la loi 20.480 est à applaudir, dans la mesure où elle élargit la notion de parricide en y incluant l'ex-conjoint ou le conjoint. Si la victime de parricide est la conjointe ou l'ex-conjointe de l'auteur, on parle de fémicide. Cependant, l'accès à la justice reste l'un des principaux obstacles à la protection des droits des femmes.

23. L'État ne produit pas encore de données et de statistiques permettant de connaître l'étendue du problème dans le pays, mais des études conduites par des entités publiques concluent qu'au moins une femme sur trois a été victime de violences au sein de son couple³² et les statistiques fournies par les organes de sécurité publique et le pouvoir judiciaire montrent que le nombre de plaintes pour actes de violence et de cas portés en justice a augmenté de manière soutenue au cours des dernières années³³. Le traitement judiciaire des cas dans des chambres pénales montre que la proportion des issues non judiciaires n'a pas vraiment changé, il en va de même pour le rapport entre sentences condamnatoires et suspensions conditionnelles de la procédure, ce qui accuse la prévalence inquiétante d'un type de procédure judiciaire³⁴. Pour ce qui est des tribunaux de famille, les données fournies par la *Corporación Administrativa del Poder Judicial* (Organisme voué à l'administration des ressources et la prestation de services au pouvoir judiciaire) ne permettent pas de distinguer les sentences condamnatoires et la suspension conditionnelle de la procédure.

24. **Fémicide.** Les efforts déployés par le pouvoir judiciaire et le ministère public se sont concentrés dans le prompt octroi de mesures de protection protégeant la vie et l'intégrité des femmes qui dénoncent des actes de violence ; pour sa part, la politique gouvernementale s'est concentrée sur l'accroissement du nombre de centres d'accueil de victimes et du réseau de maisons d'accueil de niveau national. Ces mesures traduisent le souci d'améliorer la protection de la vie et de l'intégrité des femmes violentées par leur conjoint ou ex-conjoint. Cependant, le

³¹ De nombreuses études montrent que la composition plurielle des espaces de pouvoir et de prise de décision a un impact sur le type de résolutions prises et sur le contenu des sentences. Au Chili, la représentation féminine dans les différents tribunaux peut être décrite comme suit : la présence de femmes a augmenté de 20 à 35 % entre 1995 et 2009 (y inclus à la Cour suprême, la Cour d'appel et au Tribunal constitutionnel), néanmoins, seul 30 % des juges et 32 % des présidents des cours sont des femmes. La première femme à avoir siégé à la Cour suprême est Maria Antonia Morales en 2001. (PNUD. Développement humain au Chili : genre, les défis de l'égalité. Santiago, 2010). Une situation semblable peut être constatée au ministère public : 28 % des procureurs sont des femmes et seul un bureau du procureur sur 18 est dirigé par une femme. (Informations tirées des pages Internet du ministère public et de la Défense pénale publique en août 2011).

³² Le sondage national sur la victimisation, conduit en 2008 par le ministère de l'Intérieur, montre que la prévalence de violence familiale faite aux femmes est de 35,7 %. Les données concernent des femmes âgées de plus de 15 ans qui ont vécu en couple, dès lors, sont exclues de ces données les violences perpétrées au sein de rapports amoureux sans vie en commun et les violences sexuelles de la part de membres de la famille. Disponible sur http://www.seguridadpublica.gov.cl/files/presentacion_violencia_intrafamiliar_v2.pdf

³³ Le ministère de l'Intérieur signale que le taux de plaintes pour violence conjugale est passé de 390,3 sur 100 000 habitants en 2001 à 638,5 sur 100 000 habitants en 2010. Pour sa part, le ministère public a recensé 53 963 cas en 2007 contre 117 145 en 2010.

³⁴ Les issues judiciaires ont été de 50,6 % en 2008 et de 56,5 % en 2010, conformément aux données du ministère public. Parmi elles, 9,5 % étaient des sentences condamnatoires en 2008 et 9,9 % en 2010. Les issues non judiciaires sont passées de 49,4 % à 43,4 % pour ces mêmes années.

grand nombre de féminicides³⁵ dans le pays et le constat que dans de nombreux cas, les victimes disposaient de mesures de protection montrent que ces mesures restent insuffisantes face à l'envergure et la complexité du phénomène. Ajoutons à cela qu'il n'existe pas d'informations – ni dans les chambres pénales ni dans les tribunaux familiaux – sur l'observation ou inobservation des mesures de précaution ou des conditions des suspensions ce qui rend plus difficile l'élaboration de politiques adéquates et l'évaluation desdites politiques.

25. Campagnes et prévention. La violence à l'égard des femmes fait partie d'un modèle culturel profondément enraciné dans la société chilienne. Son éradication requiert aussi bien la prévention et l'attention des services publics que la répression de ceux qui la perpètrent. Ces trois éléments qui font partie d'une politique intégrale pour aborder le problème sont indépendants et à différents stades de développement. En effet, comme presque partout en Amérique latine, l'action étatique sur ce problème s'est concentrée sur le volet judiciaire et pénal, or ceci est insuffisant pour assurer la protection intégrale que l'État se doit d'assurer à ses citoyennes. Des efforts concertés et soutenus des institutions publiques sont nécessaires pour développer des mesures de prévention qui incluent des campagnes permanentes mettant l'accent sur les droits.

Éducation

26. Depuis longtemps, la couverture du système d'enseignement est égalitaire du point de vue du genre. Néanmoins, les causes de désertion scolaire ou d'absences (Enquête de caractérisation socio-économique nationale CASEN 2009) obéissent à des modèles traditionnels de genre : les hommes quittent l'école pour travailler et les femmes pour accomplir des fonctions reproductives et domestiques. Les déficits se concentrent dans des groupes spécifiques de filles et de jeunes filles, notamment celles qui sont en situation migratoire irrégulière ou réfugiées, car elles rencontrent des difficultés pour accéder au système scolaire en raison du manque de documentation rendant compte de leurs années d'études. Bien que le ministère de l'Éducation dispose de réglementation sur ce point, les dispositions prévues n'abordent pas nécessairement ces difficultés. Les jeunes privées de liberté vivent une situation semblable : plusieurs centres de détention provisoire ne comptent pas d'école ou de programmes d'éducation générale ; seuls 31 % des femmes en détention provisoire accèdent à des programmes de réinsertion scolaire et celles qui sont en régime de demi-incarcération et qui doivent intégrer des établissements scolaires réguliers sont victimes de ségrégation, ce qui les pousse à se marginaliser et contribue à l'absentéisme, notamment dans le système scolaire régulier³⁶.

27. **Éducation sexuelle.** Les visions opposées sur la manière d'éduquer les jeunes dans ce domaine expliquent que la politique éducative soit générale et délègue aux familles la responsabilité de l'éducation sexuelle. En outre, les établissements sont libres « d'élaborer des plans et programmes propres en fonction de leurs besoins et des options des communautés éducatives ». L'État ne peut se déjouer de son rôle de promotion et de réglementation au nom de la liberté d'enseignement. Sur les sept programmes mis à disposition par le ministère de l'Éducation en accord avec le SERNAM au cours de l'année 2011, deux ne sont pas conformes aux normes des droits de l'homme stipulées par la CEDAW et d'autres traités, car le contenu du matériel d'enseignement sur la santé reproductive est à réponse unique (pas de choix

³⁵ D'après les données du réseau chilien contre la violence sexuelle et domestique, depuis 2001, plus de 500 femmes ont été assassinées pour cause de genre. Disponible sur : www.nomasviolenciacontramujeres.cl

³⁶ Unité de gestion intersectorielle du Département de justice juvénile de la Direction nationale Sename, envoyée le 9 septembre 2011 mais qui rend compte des données enregistrées au 30 juin 2011.

multiples) et de caractère hétéronormatif – c'est-à-dire que l'on y présente un modèle de famille unique fondé sur des rapports hétérosexuels –, ce qui peut provoquer la discrimination de personnes ayant une autre orientation ou identité sexuelle³⁷. Cette situation est d'autant plus alarmante si l'on considère que ces programmes ne sont pas gratuits et que les écoles doivent faire des demandes de fonds qui ne couvrent que partiellement les dépenses encourues.

28. Entraves à la scolarisation des adolescentes enceintes. En 2010, on a dénombré 4 806 cas de grossesses à l'adolescence et 7 803 mères adolescentes enregistrées par le Département de la santé des étudiants de la Junaeb³⁸. Le ministère de l'Éducation a enregistré 65 plaintes pour violation du droit à l'éducation d'étudiantes enceintes ou de mères. Au cours du premier semestre 2011, 42 plaintes de ce type ont été déposées. La part des établissements où les parents déclarent connaître des cas d'expulsion ou d'annulation d'inscription pour cette raison est de plus de 10 % pour les écoles publiques, 25 % pour les écoles privées subventionnées par l'État et plus de 28 % pour les écoles privées payées³⁹. Ceci prouve que malgré l'interdiction formelle des expulsions pour cause de grossesse en l'an 2000⁴⁰, il n'y a pas assez de moyens pour contrôler le respect de la législation et éradiquer des pratiques discriminatoires qui ne peuvent être supprimées uniquement par la voie légale. Dans son rapport au Comité, le gouvernement ne rend pas compte d'avancées significatives dans l'adoption de mesures pour assurer la continuité des études de ces adolescentes.

29. L'égalité de genre est l'un des objectifs d'apprentissage transversal (OAT) définis dans les programmes⁴¹, cependant, cet objectif n'a été intégré concrètement dans aucune des matières et ne fait pas partie des attitudes à promouvoir, sauf en histoire, géographie et sciences sociales. En outre, on a éliminé le langage inclusif des programmes en signalant : « dans le

³⁷ Les lignes directrices des programmes (et non pas leur contenu intégral) sont disponibles sur le site du ministère de l'Éducation (http://www.mineduc.cl/index1_int.php?id_portal=55&id_seccion=3354&id_contenido=13646). Il s'agit des programmes suivants : Apprendre à aimer (alliance for the family aff) ; L'adolescence : une période de décisions (Centre de médecine reproductive et de développement intégral de l'adolescence) ; Sexualité, estime de soi et prévention de la grossesse adolescente (Aprofa) ; Cours intégral d'éducation sexuelle (centre d'éducation sexuelle intégrale) ; Programme d'apprentissage de la sexualité et de l'affectivité (Faculté de sciences sociales de l'Université du Chili) ; Programme d'éducation sur les valeurs, l'affectivité et la sexualité (Université San Sebastián) et Teen-Star (Université catholique du Chili). Sur la base des données publiques issues de ces programmes et des informations dont disposent les écoles pour choisir l'un ou l'autre de ces programmes, l'INDH a constaté que deux programmes ne respectent pas entièrement les normes internationales sur les droits de l'homme en matière d'information sur les moyens de contraception divers et sûrs, la santé sexuelle et les droits reproductifs et concernant la non-discrimination à l'égard de la diversité sexuelle (Apprendre à aimer, cours d'éducation sexuelle intégrale) ; et deux autres programmes n'indiquent pas clairement s'ils donnent des informations sur des moyens de contraception et s'ils travaillent dans le respect de la diversité sexuelle et l'identité de genre (Programme d'éducation sur les valeurs, l'affectivité et la sexualité et Teen Star).

³⁸ *NdT*: Junta nacional de Auxilio escolar y Becas ou Commission nationale d'aide et de bourses scolaires.

³⁹ Questionnaire à l'intention des parents d'élèves en classe de 2^{de}, Simce 2010 (Système de mesure de la qualité de l'éducation).

⁴⁰ Loi n° 19.699, du 5 août 2000.

⁴¹ La loi générale sur l'éducation (loi n° 20 370, du 2 juillet 2010) établit que les objectifs de l'enseignement doivent s'exprimer en objectifs d'apprentissage, ils doivent être définis par le ministère de l'Éducation et approuvés par le Conseil national de l'éducation. Les nouveaux programmes ont été approuvés en janvier 2012 (DS n° 439/2012) et fixent deux objectifs d'apprentissage, ceux qui ont trait à chaque discipline et d'autres objectifs à caractère transversal en lien au « développement personnel et au comportement moral et social des étudiants ».

présent document, on utilise de manière inclusive des termes comme « l'enseignant », « l'étudiant », « le professeur », « l'élève », « le camarade » et leurs pluriels respectifs (ainsi que d'autres mots équivalents dans le contexte de l'enseignement) ; c'est-à-dire que l'on parle là d'hommes et de femmes. Ce choix linguistique s'explique par l'absence de consensus sur la manière d'éviter la discrimination de genre dans la langue espagnole, sauf par l'utilisation du « o/a » (terminaison des noms masculins ou féminins), « los/las » (féminisation de l'adjectif démonstratif défini), entre autres pour parler des deux sexes ensemble et ce type de formule suppose une saturation graphique pouvant complexifier la compréhension ».

CONVENTIONS A RATIFIER

- Protocole CEDAW
- Convention n° 189 de l'OIT « Travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques », 2011
- Convention n° 183 de l'OIT sur la protection de la maternité, 2000
- Convention 184 de l'OIT sur la sécurité et la santé dans l'agriculture, 2001
- Protocole de San Salvador